



LA CUESTIÓN AGRARIA EN BRASIL

Oswaldo Coggiola

(Universidade de São Paulo, Visiting Scholar en la Università degli Studi di Roma "La Sapienza")

En Brasil se verificó, desde el comienzo de su vinculación al mercado mundial, el predominio de la gran propiedad agraria, a través del latifundio, ya que no hubo límites para las concesiones de tierras hechas a los colonizadores por la corona portuguesa. El latifundio, como vasta extensión de tierra adquirida a la espera de su valorización, y cuya principal función era la especulación inmobiliaria y no la producción agrícola, también fue característica de la América española. La despoblación del continente posibilitó la formación de extensas propiedades del grupo étnico dominante (blanco e ibérico). La escasez de mano de obra, junto a la abundancia de tierra, generó la utilización de esta última como forma de garantizar la primera. Se institucionalizó el minifundio (posesión de minúsculas extensiones de tierra) en el interior del latifundio, para asegurar mano de obra barata y constante.

Colonización y Latifundio

Las regiones americanas recibidas por Portugal (el actual Brasil) carecían de culturas desarrolladas lo suficiente para proporcionar trabajo para la extracción de metales preciosos en gran escala. El problema para la corona portuguesa consistía en encontrar el tipo de exploración capaz de valorizar la propiedad de sus territorios coloniales extensos y lejanos. Diversos factores llevaron al establecimiento con base en la producción de azúcar: el dominio de su técnica de producción, aprendido de los italianos, y ya aplicado en las islas Azores; la ruptura del monopolio comercial del azúcar de Venecia, en cooperación con los holandeses, lo que abrió los mercados del norte del Océano Atlántico.

La esclavitud de los nativos permitió el establecimiento de los primeros *engenhos*. De acuerdo con Alberto Passos Guimarães, bajo la señal de la violencia contra las poblaciones nativas, cuyo derecho congénito a la propiedad de la tierra nunca fue respetado ni ejercido, se crearon las condiciones para el latifundio en Brasil: del estigma de ilegitimidad que fue su pecado original, nunca se salvaría. Con la creciente rentabilidad adquirida por las exploraciones, el indígena fue siendo sustituido por el africano negro. La plantación de azúcar, con el uso del esclavo, constituía la base de la primera colonización del Nordeste de Brasil, que llegó a su máximo apogeo en el final del siglo XVI y al inicio del siguiente. Con esa colonización se pusieron las bases del latifundio brasileño.

Cuando João II dividió el territorio sistemáticamente en *capitanias*, ya en Brasil existían capitanes nombrados para asumir esas funciones. Lo que fue hecho entonces fue demarcar la tierra, atribuirla o declarar los derechos respectivos y los servicios que tenían que prestar los colonos para la corona portuguesa: los *sesmeiros* o colonos eran tributarios de la corona. La tierra así dividida dió el bosquejo general del sistema administrativo en la primera fase de la historia colonial de Brasil. La corona atribuyó las tareas públicas: la administración de los territorios y la recolección de impuestos, las personas que ejercitaron las tareas administrativas se vincularon al Estado. Esta política de la delegación de poderes y tareas públicas para personas individuales produjo beneficios para los poseedores de puestos públicos, que construyeron grandes fortunas.

La corona utilizó la iniciativa individual para desarrollar su proyecto colonial, pero siempre bajo su control más o menos presente. La corona usó recursos humanos y financieros particulares para sus proyectos de colonización, sin someterse a cualquier obligación, aunque otorgando, a cambio de ello, las ganancias de la actividad económica y títulos nobiliárquicos.

La corona portuguesa sólo actuó directamente en la colonia cuando la situación lo exigía, o cuando grandes beneficios estaban asegurados. Ya en el inicio del proceso de colonización, la corona

reservó el *pau brasil* para sí, dejando la exploración de metales preciosos, guardando sin embargo la posibilidad de la recolección en su beneficio del *quinto real*. La corona usaba la iniciativa y los recursos de los particulares, y los colonos pidieron recompensa para sus servicios en las llamadas *honras e mercés*, figura jurídica frecuente en los documentos coloniales.

Otro elemento fundamental para los colonos era la propiedad de la tierra, siempre distribuida por el Rey, a través de la Ley de Sesmarías. La tierra podía ser donada directamente por el propio Rey, en este caso para altos empleados de su corte. Podía ser dada también por el Gobernador, a colonos o empleados del gobierno. Los pedidos de tierra explican la relación entre la concesión de las tierras y los servicios realizados o prometidos: la participación en la conquista de la zona, el combate contra los indios y/o otras personas europeas de otras nacionalidades, o la realización de obras públicas, era recordada o evocada en los pedidos. El primer criterio de distribución de la tierra de la colonia portuguesa en América era el régimen de la concesión de *sesmarías*. Este ordenamiento jurídico del territorio era, antes de nada, una organización reguladora de la norma procesual de la distribución de tierras en la colonia.

Caio Prado Jr., en *Evolución Política del Brasil*, hizo una síntesis histórica del período colonial, y para eso regresó a la historia de Portugal, mostrando la ascensión de las burguesías mercantiles y como, con ella, el movimiento de la conquista de territorios ultramarinos empezó. El "descubrimiento" de Brasil en 1500 no causó gran entusiasmo en los portugueses, que en ese momento estaban mucho más interesados en sus territorios asiáticos y africanos, tanto que, durante los primeros treinta años después de su descubrimiento, en Brasil no se ocupó sino en grado muy escaso su inmenso territorio, en el que solamente el *pau brasil* ejercía atracción económica. Pero el inicio del siglo XVI fue caracterizado por la disputa entre las grandes potencias europeas por el poder en el "Nuevo Mundo"; Portugal decidió precaverse, y volvió los ojos hacia el Brasil entonces. En 1549 el gobierno general de la colonia americana fue instituido, y la corona portuguesa asumió el régimen del capitán: Caio Prado Jr. negó la caracterización de "feudal" a ese régimen.

La operación del sistema de donaciones de *sesmarías* acarreó la formación de las grandes propiedades que configurarían el *sistema* del latifundio brasileño, e hizo claro el carácter mercantil de la colonización: las grandes propiedades prevalecieron, necesitando de mano de trabajo en amplia escala, llevando a la puesta en práctica de la esclavitud indígena en un primer momento, y africana posteriormente.

El sistema colonial de distribución de tierras fue el responsable por la formación del latifundio; y conspiró contra la pequeña propiedad. A diferencia de las colonias inglesas, en Brasil los pequeños propietarios no tenían incentivo de parte de la metrópolis, incluso en la legislación. Sin propiedad pequeña, sin cualquier industrialización sistemática, el latifundio constituía la unidad económica básica de la colonia. La sociedad fue siendo moldeada en concordancia con la economía; los grandes propietarios rurales monopolizaron las riquezas, el prestigio y el dominio sobre la masa popular, compuesta por pocos hombres libres, indios, mestizos y negros esclavizados. Caio Prado Jr. condenó a los colonizadores de las *entradas* y *bandeiras*, llamándolos de "cazadores de hombres" (o sea, de mano de obra), y mostró el papel de la Compañía de Jesús para frenar tal movimiento.

Cuando el Brasil se tornó independiente, junto al resto de América Latina, las bases de su atraso económico ya estaban, en gran parte, echadas: "La irrelevancia de América Latina a mediados del siglo XIX era incontestable. A pesar de ser, fundamentalmente, una exportadora de productos agrícolas, en contraste con Europa que se industrializaba, su producción agrícola era una fracción de la europea. La producción total europea, en 1850, era por lo menos 30 veces superior a la latinoamericana". Esto pese a que "aunque la participación de América Latina en el comercio mundial haya declinado claramente - de 11% en el siglo XVIII, a 5,1% al final del siglo XIX - en términos absolutos las exportaciones latinoamericanas aumentaron mucho".¹ En el caso brasileño, las exportaciones se decuplicaron durante el siglo XIX.

La economía de exportación primaria, agilizada por la independencia (o sea, la quiebra del monopolio comercial ejercido por el país colonizador) consolidó el latifundio. En vez de favorecer

¹ DILLON SOARES, Glaucio Ary. *A Questão Agrária na América Latina* Rio de Janeiro, Zahar, 1976, pp. 27-39.

el acceso a la tierra y a la pequeña propiedad (como la *Homestead Act* en los EEUU), la Ley de Tierras, aprobada en Brasil en 1850, favoreció a la gran propiedad. La ley norteamericana propiciaba la ocupación de tierras, la brasileña la dificultaba. Los medios tradicionales de acceso a la tierra, co-propiedad, arriendo, ocupación, fueron proscritos, las tierras no utilizadas volvieron al Estado que, por su parte, vendía las tierras por un precio más alto. Fué visible la ausencia de una burguesía industrial, o de una clase social suficientemente fuerte como para luchar contra el latifundio (como los granjeros de EEUU), inexistentes en la época colonial. La ausencia de esa clase (no la extensión en sí de la propiedad agraria) hizo que el latifundio fuese una fuente estrecha de acumulación capitalista.

De acuerdo con la "Ley de la Tierra", editada por Dom Pedro II, sólo tenía derecho a la tierra quien tuviese como comprarla de la corona portuguesa. Se consolida de esta forma el latifundio. Con el decorrer del tiempo, ya en la Vieja República, alrededor de 1920, 4,5% de aquellos que podían comprar, poseían prácticamente la mitad de las propiedades rurales del país. El Ministerio de Agricultura fue creado en 1930 y en el periodo del Gobierno Vargas todas las cuestiones agrarias no fueron prioridades, la legislación laboral creada en el Estado Nuevo sólo daba cobertura a los trabajadores que actuaban en el área urbana. En las décadas siguientes creció el éxodo rural, la industrialización, las migraciones regionales y la concentración del latifundio. Pero es en ese momento que las ligas campesinas comienzan a organizarse y el movimiento enseguida se esparció por todo el Brasil.

Capital y Producción Agraria

En el siglo XX el desarrollo económico brasileño experimentaría todas las dificultades vinculadas a "la desproporción creciente entre la industria, de desarrollo formidable, y la agricultura, atrasada", en la palabras de Bujarin (*La Economía Mundial y el Imperialismo*). La agricultura fue la primera rama productiva que entró en la crisis crónica típica de la era de los monopolios, como ya constataba Kautsky, a inicios del siglo, en el clásico *La Cuestión Agraria*: "Desde hace 20 años, los economistas liberales nos profetizan el próximo fin de la crisis agraria. Y sin embargo, cada día aumenta, se agrava y se extiende el mal. No hay que ver en ello un fenómeno pasajero sino un fenómeno constante, una verdadera revolución político-económica".

Las posibilidades de acumulación a partir de la capitalización de la renta agraria estaban limitadas crecientemente por la caída progresiva de los precios agrícolas internacionales (el "deterioro de los términos de intercambio"), y por la exigüidad del mercado interno de los países exportadores de productos agrarios, pues, como ya notaba Kautsky, "no es en el proletariado obrero donde el capitalismo industrial busca su más importante mercado sino en la masa no proletaria, ante todo la campesina".

El poder de los propietarios agrícolas descansa en la renta absoluta de la tierra. La distribución en cuotas proporcionales de la ganancia que se forma en la agricultura es impedida por la propiedad de la tierra, la cual, siendo un monopolio, pretende para sí una parte de dicha ganancia y se apropia de la diferencia entre valor y costo de producción. La propiedad de la tierra hace, por lo tanto, aumentar el precio de los productos agrícolas (no su valor) en una cantidad igual a la renta absoluta, que viene a constituir una especie de impuesto que recae sobre toda la sociedad.

El atraso de la agricultura en relación con la industria constituye una de las manifestaciones fundamentales de la *ley del desarrollo desigual* del capitalismo, y no se desprende de la naturaleza del suelo sino de las relaciones sociales. La renta absoluta puede ser eliminada en el régimen capitalista mediante la nacionalización de la tierra. La nacionalización, aboliendo la propiedad privada, no eliminaría la renta diferencial sino que la transferiría al Estado, mas permitiría, con la supresión de la renta absoluta, reducir el precio de los productos agrícolas en una magnitud igual a la de la renta absoluta. Aboliendo el monopolio de la propiedad privada de la tierra, haría posible un mayor desarrollo de la agricultura: por eso fue defendida aun por economistas burgueses.

La burguesía capitalista no tuvo, en las diversas naciones, la osadía de nacionalizar la tierra, pues el ataque contra la propiedad privada de la tierra hubiera resultado peligroso para las otras formas burguesas de propiedad. Además, el capitalista industrial se vinculó como clase a la propiedad privada de la tierra. No puede haber, pues, un movimiento burgués serio a favor de la

nacionalización de la tierra, por la simple razón de que ninguna clase social actúa contra sí misma. David Ricardo, el gran economista de la burguesía industrial inglesa, no tomó en consideración la renta absoluta; aún más, la negó, admitiendo sólo la renta diferencial.

La formación de la renta absoluta está vinculada al hecho de que a causa del atraso de la agricultura respecto de la industria, la composición orgánica del capital agrícola es más baja que la del capital industrial. En la agricultura, la cuota del capital variable (salarios) es proporcionalmente más alta que en la industria. Como consecuencia de esto, en la agricultura la plusvalía es más elevada que la media, y el valor de los productos es, en general, superior.

La renta absoluta es común a todos los terrenos, independientemente de su localización o calidad. Dejada de lado la inferioridad de la composición orgánica del capital, la propiedad del suelo solamente crearía renta dentro de la especulación. Así, toda renta fundiaria deriva del monopolio, y "la única barrera al superbeneficio agrícola es el mercado. La tierra bajo la forma de monopolio de cantidad limitada explica la renta absoluta. Bajo la forma de monopolio de calidad diferenciada, explica la renta diferencial. El mecanismo social que crea la renta es unificado y el superbeneficio agrícola, único. Las dos formas de renta tienen la misma causa, el monopolio relativo de la tierra".² Para Lenin, "la teoría de la renta presupone que toda la población agrícola haya sido dividida completamente en latifundistas, capitalistas y trabajadores asalariados, lo que es el ideal del capitalismo, pero no la realidad".³

El desarrollo capitalista, aun atrasado, implica una transferencia del poder del latifundista a la burguesía, en la medida en que "gran parte de la producción campesina es absorbida por el arriendo y diversos tipos de acuerdo para compartir la cosecha. No obstante, la explotación del campesinado no se limita a los terratenientes; diversos grupos sociales comparten la producción campesina a través de la renta, los intereses sobre préstamos, los impuestos, etc. Los términos del comercio desfavorable para el productor campesino transforman el intercambio de mercado en otro canal de explotación del campesinado por parte de la sociedad urbana en general. El capital generado en la agricultura es, frecuentemente, absorbido por el sector terciario urbano, con una nueva burguesía urbana tomando a su cargo gran parte de la función de los terratenientes tradicionales. Gran parte de los intermediarios cumple funciones en la economía política de las sociedades campesinas. Representan a los terratenientes (inspectores, etc.) o a las grandes organizaciones burocráticas (compradores, recaudadores de impuestos). En algunos casos son 'empresarios libres'. Sin embargo, no se trata de simples mediadores, agentes honestos entre los diferentes grupos sociales y poderes. Su posición social entre los poderosos y los oprimidos hace que sus tendencias explotadoras se dirijan contra los campesinos como una cuestión de hecho".⁴

La forma más transparente de sumisión de la agricultura al capital está en la agroindustria (o *agrobusiness*). Es una situación de monopolio, donde un conjunto de productores agrícolas independientes se sitúan como proveedores de insumos frente a monopolios industriales. No es el capital industrial invertido en la producción agrícola sino la subordinación de la agricultura para transformar el proceso de reproducción del capital industrial. La producción capitalista en la agricultura posee especificidades: la importancia del factor natural, la tierra, el mayor tiempo de rotación del capital y la dificultad de compatibilizar el flujo de gastos con el de ingresos determinan un tipo diferente de financiamiento en relación con el industrial.

En Brasil, hasta 1950, la necesidad de capital dinero en la agricultura era pequeña debido a la desmonetización parcial de la producción: relaciones de producción atrasadas, bajo nivel técnico, producción de diversos insumos dentro de la propia unidad productiva. Para algunos cultivos existían fuentes de financiamiento diferenciadas con institutos estatales (azúcar, café), pero no líneas de crédito especiales para el conjunto de la agricultura. Con el desarrollo capitalista, la necesidad de capital dinero acompañó el uso creciente de herramientas e insumos en la producción.

² VERGOPOULOS, Kostas. *A Questão Agrária e o Capitalismo*. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977, p. 94.

³ LENIN Vladimir I. *O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia*. San Pablo, Nova Cultural, 1988.

⁴ SHANIN, Theodor. *Naturaleza y Lógica de la Economía Campesina*. Barcelona, Anagrama, 1976, p. 34.

Surgen, entonces, los financiamientos subsidiados del Banco del Brasil, de los bancos oficiales y particulares, junto con la tecnificación y la eliminación de los cafetales viejos y deficitarios de San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais. El programa de erradicación del café, completado en los años '60, eliminó los cafetales antiguos, de baja productividad y calidad, carentes de mercado. Fueron expulsados, de las *fazendas*, los colonos residentes, acabando con el sistema de colonato que imperara durante setenta años, después de la abolición de la esclavitud (1888).

Lo mismo sucedió en el Nordeste, donde la modernización tecnológica expulsó a los moradores para 'recuperar' las tierras en que producían sus propios alimentos: surgen los "clandestinos", o *bóias-frias*. En la década de 1960 también comenzó, en el Amazonas, la expulsión de *posseiros* y *seringueiros* (productores independientes de caucho). En 1965, se creó el Sistema Nacional de Crédito Rural: con créditos subsidiados, se aseguró que parte de las captaciones bancarias fuese hacia la agricultura, garantizando el uso de insumos modernos y la articulación de los propietarios rurales con la industria y la agroindustria.

En la década del '60, surgió, en la economía brasileña, un departamento (sector) productor de insumos agrícolas y, con ello, la industrialización de la agricultura, que pasó a operar como un ramo industrial. Simultáneamente, en toda América Latina, se redujo proporcionalmente la fuerza de trabajo agrícola: en 1950, la población económicamente activa en la agricultura representaba 54,7% del total; en 1970, 40%, y en 1980, 34,9%. La población que vivía de la agricultura era, al final de la década del '80, de 126 a 130 millones de personas: 30-40 millones en Brasil, 25-30 millones en México, 10 millones en Colombia. La fuerza de trabajo era de 40 millones, incluidos los pequeños propietarios y los trabajadores sin tierra.

La concentración de la producción hizo surgir los monopolios agrícolas. La renta de la tierra se fue fundiendo con el lucro del monopolio. La explotación del campesino se daba a través de la venta de productos con precio (alto) de monopolio y la compra a precios artificialmente rebajados; el surgimiento de una capa de intermediarios capitalistas, que lucran a expensas del trabajador rural y del urbano; la ruina de los campesinos durante las crisis, cuando se ven obligados a vender sus tierras a precios ínfimos. Monopolios industriales y bancos se benefician a través de los altos precios de los productos industriales, de las duras condiciones de crédito, con el Estado contribuyendo vía altos impuestos. Los campesinos se endeudan, viven precariamente, pierden tierras y bienes, concluyendo por engrosar las filas del proletariado (agrícola o industrial).

El excedente pasó a ser retenido por los oligopolios, vía elevación de los precios de los insumos (producción) y atribución de costos mayores a la comercialización (circulación). Los pequeños productores no pueden formar un fondo de acumulación. Sus productos deben ser baratos, para garantizar el poder de compra del trabajador industrial y de servicios, que no es beneficiado por aumentos salariales.

En los años '70, como consecuencia de los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) hubo varios megaproyectos de inversión, en cuyo cuadro se situaron los proyectos de agricultura irrigada para el Nordeste, con vistas a atenuar las disparidades regionales y las "desigualdades sociales". Su resultado fue apenas una redistribución monopolista. La política de crédito rural subsidiado ilustró la 'triple alianza' entre industrias, bancos y latifundios. Sólo los grandes propietarios tienen acceso al crédito, en los programas más ventajosos, porque sólo ellos pueden comprar los insumos requeridos: tractores, abonos y agrotóxicos en gran escala, cosechadoras, etc. Los bancos ganaban haciendo el préstamo, y también lucaban los fabricantes industriales de esos insumos.

Dictadura y Gran Propiedad

En Brasil, en 1978, las grandes explotaciones superiores a 1.000 hectáreas, representando 1,8% del total, ocupaban 57% del área total, con 3.200 propiedades gigantes que reunían 102 millones de hectáreas, tres veces más que el área de 2 millones de minifundios. En 1989, 6.700 latifundios tenían el mismo número de hectáreas (más de 127 millones) que 4.166.000 pequeños productores. En cuanto a la participación en la renta agrícola, el 1% más rico tenía 10% en 1970, y 30% en 1980, mientras el 50% más pobre tenía 22% en 1970 y sólo 15% diez años después.⁵

⁵ CUT (Central Única dos Trabalhadores). *Cartilha de Política Agrícola*. San Pablo, 1989, p. 91.

Mientras la producción *per capita* de alimentos básicos disminuía en relación con 1964, aumentaba la exportación de productos agro-industriales, y también la pobreza de toda la población, especialmente en las áreas rurales (73% abajo de la línea de pobreza en 1990). Junto a los latifundios, los minifundistas agrupaban 3.200.000 activos, más del 20% de la fuerza de trabajo agrícola, con 1.400.000 unidades productivas.⁶ El desarrollo capitalista no eliminó el atraso agrario y el desarrollo desigual, al contrario, lo aumentó. Mundialmente, la agricultura usa 69% del agua disponible, la industria 23% y las residencias 8%. En los países atrasados, la agricultura llega a usar 80% del agua, con gran uso de agrotóxicos y fertilizantes, que contaminan los ríos. En Brasil, además, el Sudeste representa 59,2% del PIB, con San Pablo que produce 35,4% (44% de la producción industrial), en un área relativamente pequeña del territorio brasileño. Otro índice del parasitismo latifundista: según el INCRA (Instituto Nacional de la Colonización y Reforma Agraria), los minifundios representaban 72% de las propiedades en 1972, pero ocupaban 12% del área total y, aun así, eran responsables por casi 50% del área plantada con productos básicos de alimentación (arroz, porotos, habas, mandioca y maíz) y también por más de 30% del área plantada con productos de transformación industrial.

En cuanto al inmenso Nordeste, la política estatal la especializó en frutas y vegetales de exportación. El semi-árido nordestino es la mayor área semi-árida tropical del mundo, con condiciones ideales de agua, luz (más de tres mil horas de sol anuales) y calor (temperaturas altas y regulares entre 25 y 30 grados, con baja humedad relativa del aire) para aquellas culturas. La disponibilidad hídrica se debe a que los ríos nacen en lugares más húmedos y se dirigen para el Nordeste. El resultado de décadas de megaproyectos es que el Nordeste pasó a ser la segunda región más poblada del país, con el mayor porcentaje regional de población rural, con el menor producto *per capita*, y la mayor "concentración de ingresos" (polarización social): el producto bruto *per capita* del Nordeste equivale al 47,2% del promedio brasileño.

La dictadura militar fue la época de oro del latifundio: en 1978, como ya fue dicho, las explotaciones de más de mil hectáreas (1,8% de los inmuebles catastrados) ocupaban 57% del área total. La expansión del área total catastrada entre 1967 y 1978 fue de 47.700.000 hectáreas, de los que correspondían a las explotaciones gigantes (más de 10.000 hectáreas)... 45 millones (más de 95% de la expansión de la frontera agrícola en la década). El "superlatifundio", 3.200 propiedades gigantescas, reunió 102 millones de hectáreas, una superficie semejante a la del Perú, Bolivia o Colombia (y superior a la de casi todos los países de Europa Occidental, considerados separadamente).

En el catastro de 1966 se identificaron 46.000 inmuebles en el estrato de área igual o superior a las 1.000 hectáreas, que contaban con 186 millones de hectáreas. En 1978 se registraron 57.000 inmuebles con esa área, con 246 millones de hectáreas, produciéndose un aumento del 32,3 % en el área de los grandes inmuebles. En 1992, cuando ya se produce una importante evasión catastral, existían 42.000 inmuebles con superficie igual o superior a las 1.000 hectáreas, con un área de 165 millones de hectáreas.

El Estado fue el agente de ese avance, a través del crédito rural, que llegó a alcanzar un monto semejante al valor total de la producción agraria, y del que fue sistemáticamente excluido el 80% de los propietarios rurales (4 millones). En el millón restante, persistió la desigualdad: los "menores" (50%) recibían 7,4% del crédito (1969) y 5,2% (1979), mientras que los "mayores" (apenas 1%) recibieron 25,7% en 1969 y 38,5% en 1979: los 5% "más ricos" aumentaron, en ese período, su participación en el ingreso rural de 27,7% a 42,2%, una orgía latifundista. El desarrollo desigual llegó al máximo: "De los poco más de 362.000 tractores producidos en la última década, 78.800 fueron al estado de San Pablo, 70.700 a Río Grande do Sul. Paraná, Minas, Santa Catarina y Goiás se distribuyeron 40 mil tractores entre 1970 y 1980, con el resto distribuido entre los otros estados. Lo mismo ocurrió con el uso de fertilizantes químicos y agrotóxicos, que se concentra en el Sur: 73,6 kilos por hectárea para el Brasil, en promedio, pero 180 kilos para el estado de San Pablo".⁷

⁶ GRAZIANO DA SILVA, José. *Questão Agrária*. San Pablo, Brasiliense, 1994, p. 75.

⁷ GRAZIANO NETO, Francisco. *Questão Agrária e Ecologia*. San Pablo, Brasiliense, 1985, p. 46.

Además de suministrar mano de obra barata para los monopolios industriales, por la expropiación de los pequeños productores, el latifundio crea el minifundio (porque el desarrollo industrial nunca acompañó la velocidad de la concentración agraria): "Monopolizando parte importante de las tierras, siempre las más fértiles y accesibles, la población rural expulsada debe dividir una parte ínfima, la menos fértil, la más accidentada y distante. Los minifundios son también producto de la desintegración de los grandes dominios que agotaron la tierra mediante técnicas depredadoras, y se fragmentaron. La microexplotación es el complemento funcional del latifundio. Da a su propietario lo que no es producido en el latifundio, pero no en cantidad suficiente para sobrevivir, lo que lo ata a su parcela y al mismo tiempo lo obliga a emplearse en el gran dominio. El minifundio contribuye a fijar la mano de obra que el gran propietario precisa para realizar la agricultura comercial".⁸

El desarrollo capitalista implicó también la fijación de relaciones precapitalistas, de producción familiar: en 1950, los miembros no remunerados de la familia eran 54,8% de la población ocupada en la producción agropecuaria (casi 11 millones de personas); en 1975, ya eran 80,5% (de un total bastante superior a 20 millones). En la década del '80, salarios y precios recibidos por los agricultores se mantuvieron casi constantes, mientras el precio de la tierra se duplicó.⁹

El minifundio y la producción familiar crecieron en el cuadro de la peculiaridad brasileña de la constante expansión de la frontera agrícola. Los establecimientos basados en trabajo familiar (en el Brasil, hasta 20 ha) pasaron de 3,2 millones en 1970 a 4,3 millones en 1980. En el mismo período, los *posseiros* (sin título legal de propiedad) pasaron de 811 mil a casi 900 mil: es el campesino expulsado el que fue hacia áreas inhabitadas (la *mata*), o sea, que no emigró a la ciudad ni fue absorbido como asalariado por la *fazenda*.

La gran propiedad capitalista es básicamente especulativa e improductiva, lo que contribuye a la carestía de la vida, la estrechez del mercado interno y el bloqueo consecuente de las fuerzas productivas: el valor de la producción capitalista es apenas 24,4% del producto agrícola; el de la pequeña producción, que cultiva 32,5 millones de hectáreas (66,2% del área cultivada total) era de casi 51% del producto agrícola total, a finales de la década del '80.

El crecimiento agrícola en la fase del "milagro económico" (1968-1973) quedó muy atrás del industrial (menos del 5% anual) y se concentró en las áreas de exportación, reduciendo relativamente la oferta interna de alimentos: en 1966/67, las exportaciones no llegaban a 12% de la producción agrícola, mientras en 1973 ya eran responsables por casi 19%. En la década del '70, la población urbana creció a un ritmo del 4,5% anual, muy superior al de la oferta alimentaria.

Así se explica que, mientras el valor y el volumen de la producción agraria crecían, el salario real caía junto al nivel de vida. En 1968, el consumo de arroz por habitante era de 49,5 kg. anuales, en 1978 de 47 kg. anuales. En el mismo período, el *feijão* (frijol) cayó de casi 27 kg. a 21 kg. anuales, y llegó a 18,3 kg. anuales en 1979. En 1971, el salario medio mensual adquiría 46 kilos de carne bovina, o 69,3 kilos de carne avícola, o casi 43 kilos de carne porcina; en 1979, 28,7, 50,2 y 28,6, respectivamente.¹⁰

El predominio social de la producción familiar no es un índice de su superioridad frente a la capitalista: "Esos establecimientos, de escasa productividad, albergan a la aplastante mayoría de la población rural bajo condiciones de vida muy precarias. La salida del asalariamiento en la economía rural es muy estrecha cuantitativamente, y muy precaria en materia de condiciones de vida y trabajo".¹¹ La reproducción de toda la fuerza de trabajo (urbana y rural) queda entonces comprometida: en términos de disponibilidad para el consumo humano, hubo una caída de 20% por habitante-día, siendo las peores en feijão (ítem básico) y mandioca. En 1965, la disponibilidad calórica por habitante-día era de 3.148; en 1967 de 3.033; en 1979, de 2.986.¹²

⁸ TOPALOV, Christian. *Estruturas Agrárias Brasileiras*. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1978, p. 63.

⁹ IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). *Censos Agropecuários*, años 1950, 1960, 1970 y 1975.

¹⁰ PASSOS GUIMARÃES, Alberto. A estrutura produtiva da agricultura brasileira. *Novos Rumos* n° 6/7, San Pablo, 1988; e IBGE. *Anuário Estatístico*, 1980.

¹¹ DELGADO, Guilherme C. *Capital Financeiro e Agricultura no Brasil*. San Pablo, Icone, 1985, p. 233.

¹² HOMEM DE MELO, Fernando. *O Problema Alimentar no Brasil*. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983, p. 223.

La valorización del capital de la burguesía agraria, cada vez más ligada a la realización de la plusvalía en el mercado mundial, estrechaba sistemáticamente el mercado interno: entre 1977 y 1983, la producción de alimentos por habitante cayó más de 25%, mientras que los exportables crecían 7%, con la caña de azúcar creciendo casi 57%. El crecimiento de este último rubro, basado en el programa de alcohol (para sustituir la nafta) fue una operación de saqueo del Estado por los usineiros y los bancos: en 1980, los financiamientos eran otorgados con tasas del 25% anual, contra una inflación del 110%. El barril-equivalente de alcohol era producido a un costo de 72,5 dólares, en el mismo momento en que la gasolina de mejor calidad era vendida a 40 dólares el barril en Rotterdam.¹³

El alcohol era crecientemente exportado para obtener divisas para el pago de la deuda externa: atraso agrario, obsolescencia industrial, déficit público, deuda externa e interna, e inflación, estaban unidas en una cadena, en cuyas puntas se encontraba siempre el capital financiero internacional. Esto explica todas las distorsiones que hacían y hacen de la Petrobrás la vaca lechera no sólo de los barones del alcohol sino también de las empresas extranjeras del sector petroquímico.

La inversión estatal no escapa a las leyes del mercado capitalista, que en período de contracción convierte al activo inmovilizado por el Estado en un peso muerto para la valorización del capital en su conjunto (de ahí la ola de privatizaciones), esto porque la inversión estatal, canalizando los flujos de inversión, nunca sometió a una racionalidad a la inversión capitalista: al contrario, aquélla siempre estuvo sometida a la anarquía propia del ciclo del capital.

Históricamente, la burguesía de Brasil se propuso resolver la "cuestión agraria" para quebrar el dominio político de las oligarquías, valorizar el conjunto del territorio nacional y contener las sistemáticas revueltas campesinas. El gobierno militar instaurado en 1964 lanzó al ejército y otras fuerzas represivas contra la débil organización campesina, eliminando a sus líderes más representativos. Como consecuencia de esa represión desaparecieron el Movimiento de los Sin Tierra del Sur (Master), las Ligas Campesinas del Nordeste (fundadas en 1956 por Francisco Julião), y otras organizaciones de campesinos de los estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais y Goiás que, junto a los campesinos de otros estados, habían empezado a gestar la Confederación Nacional de los Trabajadores Agrícolas (Contag).

¿Reforma Agraria?

Con el triunfo de la "Revolución del 64", que contó con el apoyo de los sectores tradicionales de la clase media, los agrolatifundistas y el "gran capital", se pone en marcha una nueva política agraria que tendrá su base legal en el *Estatuto de la Tierra*. La política que se desarrolló a lo largo de las dos décadas de gobiernos militares, se asentó en dos premisas básicas: el estímulo y subvenciones a la "modernización", para los terratenientes y propietarios de tierras; para los "sin tierra y minifundistas", la promesa de la reforma agraria.

El *Estatuto de la Tierra y del Trabajador Rural*, promulgado por el golpe militar de 1964, se proponía, en las palabras de Delfim Netto, ministro de economía del gobierno militar, "un plan de integración nacional que representa la conquista de un nuevo país, dentro de la nación brasileña. Vamos a empujar la frontera para conquistarlo".¹⁴ El balance histórico es el del fracaso en la eliminación del latifundio, y también en promover el acceso democrático a la tierra, y en generalizar las relaciones capitalistas: "La remuneración de la fuerza de trabajo en el agro asume hasta hoy formas no capitalistas o precapitalistas de asalariamiento indirecto, parcial o en especie; el colonato de la cafeeultura paulista, diversos tipos de aparcería o arrendamiento, así como otras modalidades semejante de subordinación".¹⁵

La Revolución de 1930 programó "reducir al mínimo posible todas las formas de latifundio, especialmente en las fajas de territorio próximas al litoral y a las vías de comunicación", creando una legislación impositiva y de desapropiación que quedó en el papel. Nacieron después "las iniciativas reformistas, radicales o moderadas, que se redujeron durante décadas a una dimensión

¹³ GIANNETTI, Eduardo. *Proálcool, Energia e Transporte*. San Pablo, FIPE, 1981, p. 158.

¹⁴ *Apud* MORAIS, Fernando et al. *Transamazônica*. San Pablo, Brasiliense, 1970, p. 56.

¹⁵ SZMERCSÁNYI, Tamás. O desenvolvimento da produção agropecuária (1930-1970). In: FAUSTO, Boris (org.). *História Geral da Civilização Brasileira*. Tomo III, vol. 4 (O Brasil Republicano), San Pablo, Difel, 1984, p. 171.

retórica con proliferación de propuestas disueltas en los canales de circulación del poder, olvidadas en los programas, mensajes de gobierno, discursos públicos y comisiones parlamentarias".¹⁶ La fusión de la burguesía industrial con la oligarquía agraria se dio bajo la égida del capital financiero internacional, que se transformó en uno de los mayores latifundistas (con las propiedades agrarias de las multinacionales, o el Proyecto Jari, de extracción de celulosa en la Amazonia).

El *Estatuto* del gobierno militar instaurado en 1964 multiplicó el trabajo por pieza (*empreitada*) del *bóia-fria*, al tiempo que la expansión de la frontera "hacia áreas donde la mano de obra es escasa y se recrean formas diversas de esclavitud, incompletas pero incuestionables", con "tasas altísimas de renta de la tierra, exorbitantes en cualquier país capitalista desarrollado".¹⁷ Lejos de ser una variante específica del capitalismo ("salvaje"), el caso brasileño constituye una variante extrema de las características parasitarias que rigen mundialmente al capital financiero. La evasión impositiva es típica del latifundio: durante la dictadura alcanzó 72% del Impuesto Territorial Rural (ITR), representando apenas 0,044% del valor de las propiedades rurales. Casi 67% de los propietarios de mas de 10 mil hectáreas ignoraban al ITR.¹⁸

Se afirma que, en la Constituyente de 1988 los capitalistas "modernos" "fueron derrotados en la definición del papel de la tierra en la Constitución".¹⁹ En realidad, la Constituyente apenas sancionó el entierro de la reforma agraria, con la connivencia de los "modernizadores". El régimen militar había promovido un remate de las tierras públicas, entre latifundistas, empresarios del Centro-Sur y multinacionales. So pretexto de estímulo a la inversión, redujo el impuesto a los réditos en el campo en un 50% e hizo la vista gorda a la evasión del ITR. Los efectos de esas medidas fueron drásticos y rápidos. Pueden constatarse si se compara la forma en que se distribuyeron las tierras nuevas a lo largo de varios años, en las zonas pioneras, dentro de todo el país.

Entre 1950 y 1960, el 84,6% de tales tierras fueron ocupadas por establecimientos agrícolas que tenían un máximo de 100 hectáreas, y sólo el 15,4% representó a los establecimientos con más de 100 hectáreas. Entre 1960 y 1970, cuando ya estaban vigentes el Estatuto de la tierra y la política de incentivos fiscales para el desarrollo de la Amazonia, se incorporó el 35% de esas tierras a establecimientos con menos de 100 hectáreas contra un 65% a establecimientos con más de 100 ha. Finalmente, sólo un 0,2% de tierras nuevas se destinaron a establecimientos con menos de 100 hectáreas, mientras que el 99,8% se destinó a los de más de 100 hectáreas (el 75% de esta última área fue ocupada por establecimientos con más de 1.000 hectáreas).

Como resultado, no más de 50 mil personas (2,6% de los propietarios) se hicieron dueñas de 286 millones de hectáreas cultivables (47% del total). En consecuencia, de 600 millones de hectáreas cultivables, apenas 40 millones son cultivadas; se creó un caos jurídico en relación con la posesión de la tierra, con títulos fraudulentos equivalentes a 3 o 4 veces el área existente; hubo un principio de disgregación del Estado, pues en las zonas en conflicto, jagunços armados asumieron la represión, con sus financiadores latifundistas organizándose nacionalmente en la UDR (Unión Democrática Ruralista); la lucha de los *posseiros* y de los sin tierra se tornó nacional y explosiva.

ESTRUCTURA AGRARIA BRASILEÑA								
Tamaño de la propied.	1985				1992			
	Nº de Establecimientos	%	Area Total (ha)	%	Nº de Establecimientos	%	Area Total (ha)	%
Total	5.834.7777	100	376.286.577	100	3.114.898	100	331.364.012	100
Menos de 10 ha	3.099.632	53,07	10.029.780	3,0	995.916	32	4.615.909	1,4

¹⁶ CAMARGO, Aspásia. A questão agrária: crise de poder e reforma de base. In: FAUSTO, Boris (org.). *História Geral da Civilização Brasileira*. Tomo III, vol. 3 (O Brasil Republicano), San Pablo, Difel, 1984, p. 125.

¹⁷ GORENDER, Jacob. *Gênese e Desenvolvimento do Capitalismo no Campo Brasileiro*. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1987, p. 54.

¹⁸ *Folha de S. Paulo*, 14 de mayo de 1989.

¹⁹ RIOETT, Riordan. Brazil's transition to democracy, *Current History* 88 (536), marzo 1989, p. 118.

10 a 50 ha	1.728.232	29,6	39.525.515	10,5	1.395.043	43	31.276.293	9,4
50 a 100 ha	438.192	7,5	30.153.422	8,0	336.368	10	23.391.447	7,1
100 a 1000	518.616	9,0	131.893.957	35,0	393.615	12	106.32.369	32,1
1000 a 10.000	47.931	0,8	108.397.132	28,5	41.976	1,6	100.85.260	30,4
+ de 10.000	2.174	0,03	56.287.168	15	1.980	0,0	54.904.055	19,6

Vemos, en el cuadro precedente, que en 1985, de un total de 5.834.777 inmuebles, había 4.871.756 con un máximo de hasta 100 hectáreas (casi el 91%) ; estos contaban con apenas el 21% de las tierras, mientras que casi el 80% de las tierras restantes estaban concentradas en el 10% de propietarios con más de 100 hectáreas. En 1992, de un total de 3.114.898 establecimientos, el 85% de los mismos tenían hasta 100 hectáreas, contando tan sólo con el 17,9% del área total de hectáreas, de un total de 331.364.012. Como contrapartida, aproximadamente el 15% de los establecimientos con más de 100 hectáreas, detentaba casi el 83% del área total.

Bajo esas condiciones, el gobierno de transición, inaugurado en 1985, decretó el PNRA (Plan Nacional de Reforma Agraria) para evitar la descomposición de la situación y resolverla a través de decretos-ley. La izquierda "moderna" asumió el Ministerio de la Reforma Agraria y el INCRA, defendiendo el "choque capitalista", contra el "patrimonialismo". Néelson Ribeiro calmó a los latifundistas - "el Brasil es una sociedad capitalista, la invasión de propiedad es un crimen" – alertándolos, sin embargo, sobre "las razones políticas que tornan impostergable la reforma agraria".

El PNRA retomaba la prioridad de la colonización de tierras, lo que suponía el desplazamiento de la población rural para las regiones menos habitadas. El PNRA se condicionaba a la definición de las áreas prioritarias y de los inmuebles que debían ser desapropiados por las Comisiones Agrarias, en las que habrá una fuerte presencia y acción de los representantes de los grandes propietarios de tierras.

El PNRA preveía el asentamiento de 1,4 millones de trabajadores hasta 1989: un defensor del plan admitió que "en los años '70, 15 millones fueron expulsados del campo. En los próximos 15 años, que es cuanto va a durar la reforma, otros millones serán expulsados por la dinámica capitalista de la agricultura".²⁰ El presidente Sarney, sin embargo, decretó la desapropiación de apenas 23% del área prevista. Uno de los responsables por el PNRA (jefe del INCRA) concluyó que fue un fracaso total. Menos de 50 mil familias recibieron su lote, en condiciones precarias. Con cuatro ministros en dos años el gobierno de la "democracia" enterró de hecho la reforma por el decreto-ley de 23 de octubre de 1987: la Asamblea Constituyente de 1988 se limitó a sancionar lo sucedido.²¹

El proletariado rural pasó de 124.341 personas en 1970 a 1.511.774 en 1976 (17% de los trabajadores rurales),²² afectando a los estados industriales. Surgieron entonces los primeros congresos nacionales de trabajadores sin tierra, que dieron origen al MST, en Curitiba y Brasilia, así como se incrementaba la participación campesina en los congresos de la CUT (Central Unica de Trabajadores, surgida en 1983). "El MST ponía el dedo en la llaga y quebraba la aparente unidad en torno de la reforma agraria. El Estatuto de la Tierra no resolvía el problema creado por los latifundios modernos, como en Ribeirão Preto: representaba la política de modernización del

²⁰ GRAZIANO DA SILVA, José. *Para Entender o PNRA*. San Pablo, Brasiliense, 1985.

²¹ En la Constitución, promulgada el 5 de octubre de 1988, en el Capítulo III, artículos 184 a 191, se recogen los aspectos relacionados con la política y reforma agraria. En ella, al mismo tiempo que se reconoce la expropiación por interés social y para la reforma agraria, se determinan los límites de la misma. Así se indica, que no se podrán expropiar: a) la pequeña y mediana propiedad rural, siempre que su propietario no posea otra y, b) la propiedad productiva. Los beneficiarios de la distribución de inmuebles -dice el texto constitucional-, recibirán títulos de dominio o de concesión de uso, innegociables por el plazo de diez años. Por último, en cuanto a los *posseiros* y ocupantes, señala que, quien no siendo propietario de inmueble rural o urbano, pero que posea como suyo, por cinco años ininterrumpidos, sin oposición, algún área de tierra en zona rural, no superior a cincuenta hectáreas, convirtiéndola productiva con su trabajo o el de su familia, teniendo en ella su casa, se le otorgará la propiedad.

²² SINGER, Paul. *Dominação e Desigualdade*. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981, p. 129.

latifundio, pues diseñaba como ideal a la empresa rural”.²³ La cuestión agraria cambiaba su carácter de clase.

Contrariando todos los pronósticos acerca de la democracia como calmante de los conflictos de clase, la Nova República fue el teatro de su agudización: en 1986, 768 conflictos agrarios implicaron 567 mil personas en un área de más de 10 millones de hectáreas. En ese año y en 1986, 524 trabajadores murieron en conflictos, contra poco más de 50 en 1982, con la UDR latifundista usando abiertamente métodos de guerra civil. El gobierno de la “democracia” hizo su opción: habiendo reconocido oficialmente la existencia de 12 millones de labradores sin tierra, y de 170 millones de hectáreas ocupadas por latifundios improductivos, de las que 10 millones en situación de conflicto implicando casi 90 mil familias, desapropió apenas 620 mil hectáreas, dando posesión de poco más de 130 mil de ellas a 5 mil familias, cifras ínfimas frente a la magnitud del problema.

La base social de la UDR fue formada por ganaderos “amenazados” por la reforma agraria. Además, desde el principio, un número considerable de medios y grandes propietarios, vinculados al complejo agro-industrial, se unieron y apoyaron a la UDR. Unos y otros pretendían frenar unidos los efectos derivados de la lucha por la reforma agraria y de las ocupaciones de tierra por parte de los campesinos y sin tierra. Sus fundadores tenían como principales líneas de acción: el enfrentamiento directo con los trabajadores rurales, la preparación de una “guerra” en el campo (que se cobraría innumerables vidas de campesinos y líderes rurales) que incluía la formación de milicias al servicio de los grandes propietarios de tierras.

A medida que fue consolidando su situación, la UDR amplió su actuación al campo jurídico y constitucional. En este ámbito se centró en la formación de un arsenal jurídico de apoyo a los propietarios de tierras y al Congreso Constituyente, garantizando también una mayor participación y control en las Comisiones Agrarias estatales, determinantes de las actuaciones en el campo de la reforma agraria. En el texto constitucional de 1988 se vieron plasmadas las reivindicaciones de la UDR, pero no así la de los trabajadores sin tierra y campesinos. Tampoco la Ley n° 8.269, de 25 de febrero de 1993, que reglamentó los dispositivos relativos a la reforma agraria, ni las medidas provisionales posteriores, consiguieron revertir la tendencia hacia la concentración agraria en el Brasil.

La expropiación por interés social de las áreas improductivas, para destinarla al asentamiento de los trabajadores rurales, fue frenada a través de los tribunales y del maquillaje llevado a cabo por los grandes propietarios. Estos, transformando el tipo de inmueble, via parcelación o fraccionamiento fraudulento, o haciendo creer que es productivo, han impedido las actuaciones del Ejecutivo y de los Estados tendientes a la Reforma Agraria. Asimismo, cuando la expropiación se llevaba a cabo, el coste elevado de las indenizaciones a los propietarios complicó aún más todo el proceso complejo burocrático-administrativo y judicial.

El cuadro siguiente descompone la estructura agraria brasilena, de acuerdo al tamaño de las propiedades, en 1992, poco más de un lustro después de adoptado el PNRA:

Tamaño de la Propiedad	Nº Total de Inmuebles	% Inmuebles	Area Total Ha	% Area1
Igual a 0	48.508	2	0	0
Menos de 1	50.566	2	25.827	0
1 a 2	92.423	3	125.843	0
2 a 5	357.756	11	1.216.350	0,4
5 a 10	446.663	14	3.247.889	1,0
10 a 25	841.963	27	13.697.633	4,1
25 a 50	503.080	16	17.578.660	5,3
50 a 100	336.368	10	23.391.447	7,1
100 a 200	201.564	6	27.405.779	8,3
200 a 500	140.609	4	43.344.186	13,1
500 a 1.000	51.442	2	35.573.732	10,7
1000 a 2.000	23.644	1	32.523.253	9,8
2000 a 5.000	14.840	0,5	43.804.397	13,2

²³ AKCELRUD, Isaac. Reforma Agraria. San Pablo, Global, 1989, p. 59.

5000 a 10.000	3.492	0,1	24.524.954	7,4
10.000 a 20.000	1.236	0,0	16.945.648	5,1
20.000 a 50.000	553	0,0	16.062.217	4,8
50.000 a 100.000	116	0,0	7.848.521	2,4
100.000 y más	75	0,0	24.047.669	7,3
Total	3.114.898	100	331.364.012	100

Fuente : INCRA/SNCR-recadastramiento 1992 según el Atlas Fundiário 1996

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra

Hacia el final de la década del '70, en el principal estado sulista, los campesinos comenzaron a reivindicar tierras para trabajar. Ocuparon haciendas anteriormente expropiadas (Macali, Brilhante), intentaron ocupar una hacienda desocupada de titularidad dudosa; y, por último, decidieron acampar al lado de la carretera, exigiendo tierra en el estado. Surgía así el campamento de "Encrucilhada Natalino", en Ronda Alta. Será en torno a esta lucha, y bajo el signo de las ocupaciones, que se estructurará, poco a poco, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra en el estado de Rio Grande do Sul.

En el Estado de Paraná, los campesinos del oeste, que ya se habían organizado con un cierto éxito en la década del 50, al ser expropiados para construir la gran presa de Itaipú, articularon el Movimiento de los Sin Tierra del Oeste del Paraná (Mastro). Siguiendo este ejemplo, y apoyados en él, irán surgiendo otros Movimientos de los Sin-Tierra en otras regiones y estados del país. En Sao Paulo, el movimiento se organizará en torno a la resistencia y a la conquista de los arrendatarios de la Hacienda Primavera en Andradina. De forma similar, en Mato Grosso do Sul la lucha fue conducida por los arrendatarios que comenzaron a reivindicar tierras. Expulsados, acamparon en Itaquerai. La tierra conquistada, después de duros y sacrificados esfuerzos, cerca de Cassilandia, era mala y sin condiciones de cultivo. Sin embargo, sería esa dura y fracasada experiencia la que llevaría a organizarse a los sin-tierra en el estado.

Con el empeño de articular a los diferentes Movimientos de Trabajadores Rurales Sin-Tierra de los estados del sur, que sienten la necesidad de organizarse, surgió el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra del Sur. Conscientes de la importancia de una unidad nacional, se impulsaron los contactos regionales para crear una organización nacional de los sin-tierra. Tras un encuentro fundacional de enero de 1984, y otros encuentros parciales, se concretaría en el Primer Congreso Nacional de los Trabajadores Rurales Sin-Tierra, que se celebró en Curitiba (Paraná) al que asistieron 1500 delegados, representando a todos los estados del Brasil.

En el cuadro del empantanamiento de la reforma agraria "oficial", el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) surgió de una doble crisis: la del trabajo agrario de la Iglesia (Pastoral de la Tierra y CEBs) y del sindicalismo conciliacionista de la CONTAG, mayoritario en la década del '70. Teóricamente, eran miembros de la CONTAG todos los que no eran empleadores rurales, o sea, los asalariados, los pequeños productores, aparceros y arrendatarios, hasta los propietarios minifundistas. En la práctica, en cambio, sucedió otra cosa. Según João Pedro Stédile, principal dirigente del MST, "el MST existe hace más de 15 años. En un primer período (1979-1983), de retomada de la lucha por la tierra, ocurrieron ocupaciones y movilizaciones en muchas regiones, pero aisladas entre sí. Después de un proceso de mutuo conocimiento y articulación, se constituyó un movimiento nacional, con la realización de un encuentro nacional, en enero de 1984, en Cascavel (Paraná), con representantes de 16 estados".²⁴

En el *Documento Político Básico* del MST se insistía en la importancia de la Iglesia en ese origen: "Tuvo un papel no sólo de apoyo o de aliada sino de dirección de las luchas. La CPT (Comisión Pastoral de la Tierra), sus agentes, padres y hasta obispos, por su trabajo de concientización, capacidad intelectual e influencia de masas, y su vínculo directo con las luchas, asumieron durante cierto tiempo la dirección". Dos ocupaciones, en 1979, dieron nombre al MST: "Por causa del Movimiento de Agricultores Sin Tierra (Master) de Brizola y el PTB, la prensa local dijo: ¡los sin

²⁴ STÉDILE, João Pedro. A luta pela Reforma Agrária. *Revista ADUSP* n° 9, San Pablo, junio 1997.

tierra volvieron! Funcionó: fue la prensa que nos bautizó. Esas dos ocupaciones originaron el MST, el 7 de setiembre de 1979. En 3 o 4 meses, los agricultores fueron asentados y fue una gran victoria".²⁵

No fue un movimiento local sino nacional, el cual pasó al margen del sindicalismo conciliacionista existente: "Las luchas que marcaron el origen del MST fueron las ocupaciones de las glebas Macali y Brillhante, en Ronda Alta (Río Grande do Sul) en 1979; la ocupación de la estancia Burro Branco, en Campo Erê (Santa Catarina) en 1980, el mismo año del conflicto en Paraná entre 10 mil familias y el Estado, por causa de la inundación de tierras con la construcción de Itaipú; en San Pablo, la lucha de los *posseiros* de Fazenda Primavera en Andradina, Castilho y Nova Independência; en Mato Grosso do Sul (Naviraí y Glória de Dourados), miles de arrendatarios desarrollaban una intensa lucha de resistencia al desalojo. Otras luchas acontecían en Bahia, Río de Janeiro y Goiás".²⁶ Fue la lucha en San Pablo la que dio al MST notoriedad nacional: "El descubrimiento del Pontal de Paranapanema por el MST, una enorme área de asentamiento, con lugar para 25 mil familias, donde la propiedad no está siendo disputada en tribunales (pues ya fue probada la ilegalidad de la ocupación por los actuales hacendados) sino solamente el valor de la indemnización, trajo al MST a San Pablo, le dio cuerpo social y nitidez a los ojos de las elites políticas. El MST nació nacionalmente a partir de un hecho estadual".²⁷

El balance del MST, al cabo de su primer década de existencia, era impresionante, por el número de trabajadores sin tierra movilizados y asentados. Aun así, los resultados obtenidos apenas arañaban la estructura de la gran propiedad fundiaria. Amabs características son visibles en el cuadro siguiente:

ASENTAMIENTOS DE LA REFORMA AGRARIA EN BRASIL (1986-1996)				
Región	Estados	Nº de Asent.	Nº de familias asentadas	Area (ha)
Norte	Acre	2	387	39.847
	Amazonas	2	1.221	135.544
	Amapá	1	153	7.760
	Pará	19	10.812	474.155
	Rondonia	3	1.347	70.645
	Roraima	3	949	102.579
	Tocantins	96	8.381	41.557
	Nordeste	Alagoas	12	857
Bahía	106	11.323	371.277	
Ceará	136	8.314	297.063	
Maranhao	136	26.685	1.040.506	
Paraíba	70	4.998	50.801	
Pernambuco	124	8.318	72.881	
Piauí	139	7.489	326.087	
Rio G. do Nrt.	60	5.265	110.602	
Sergipe	53	3.055	39.198	
Sudeste	Espírito Santo	34	1.131	12.939
	Minas Gerais	37	3.454	138.591
	Rio de Janeiro	47	3.701	32.456
	Sao Paulo	48	5.462	97.531
Sur	Paraná	134	8.223	162.166
	Rio Grande do Sul	111	5.376	104.184
	Santa Catarina	77	2.281	48.203
Centro-Oeste	Goiás	51	3.114	167.984
	Mato Grosso do Sul	26	5.142	142.681
	Mato Grosso	37	7.734	774.197

²⁵ STÉDILE, João Pedro. O MST e a questão agrária. *Estudos Avançados* 11 (31), San Pablo, IEA-USP, 1997.

²⁶ FERNANDES, Bernardo M. Formação, especialização e territorialização do MST. In: STÉDILE, João P. (org.). *A Reforma Agrária e a Luta do MST*. Petrópolis, Vozes, 1997, p. 134.

²⁷ NAVARRO, Zander. Sete teses equivocadas sobre as lutas sociais no campo. In: João P. Stédile (org.). *Op. Cit.*, p. 120.

Total	1.564	145.712	4.870.172
-------	-------	---------	-----------

FUENTE : INCRA y MST (Asentamientos realizados por el INCRA y los gobiernos estatales hasta marzo de 1996)

A 13 años de su fundación formal, el MST estaba organizado en 21 estados, donde ya asentó en ocupaciones de áreas ociosas a 138 mil familias, con 3,7 salarios mínimos mensuales promedio (el promedio brasileño es de 3,82 salarios mínimos por familia). De acuerdo con el MST, hasta 1996 se realizaron 1.564 asentamientos, ocupando un área de 4.870.171 hectáreas, con 145.712 familias.

Al mismo tiempo que privilegiaba la acción directa, hasta transformarse en sinónimo del "radicalismo intransigente" en el Brasil, el MST planteó su lucha en el marco legal de la Constitución de 1988. El gobierno Sarney (1985-1990) fijó el objetivo de asentar 1,4 millón de familias, pero sólo lo hizo con 90 mil, en una hipótesis optimista, o sea 6% de su objetivo. El gobierno de Fernando Collor de Mello (1990-1992) prometió 500 mil asentamientos, pero frenó la inscripción de nuevas tierras y las desapropiaciones: sólo 23 mil familias recibieron nuevos títulos. El gobierno de Itamar Franco (1992-1994) prometió menos todavía: 20 mil en 1993 y 60 mil en 1994, y benefició a apenas 12.600 en los dos años. Fernando Henrique Cardoso (FHC) prometió en campaña 400 mil títulos, que redujo a 260 mil después de elegido, y se quedó atrás también de esa cifra: 42.912 en 1995, 62.044 en 1996, 21 mil en 1997.²⁸

João Pedro Stédile, líder del MST, criticó las mentiras ocultas por las de por sí limitadas cifras oficiales: "Se suma toda la historia del Brasil, desde Getúlio Vargas, el primero que colonizó oficialmente, hasta hoy. Las cifras indican proyectos de colonización, que no tienen nada que ver con asentamiento: hay consenso en que hay 150 mil familias asentadas en los últimos 15 años, todas como producto de la lucha, en ningún caso por iniciativa del gobierno". También el PT 8 (Partido de los Trabajadores) planteaba una reforma en el cuadro del desarrollo capitalista, "articulada con una política de desarrollo territorial y complementación agroindustrial (que) constituye una opción para la dinamización político-económica del interior, de las ciudades pequeñas que gravitan en torno de la economía agraria: 3.300 municipios con menos de 25 mil habitantes" (hay en Brasil poco más de 5.000 municipios).²⁹

Sometido a la influencia eclesiástica y del propio PT, el MST se definió como "movimiento no institucional", lo que significa que no planteó una alternativa política general. Al no hacerlo, la reforma agraria, inclusive los asentamientos conquistados por la acción directa, pasaron a depender del visto bueno del propio gobierno, o sea, de la liberación de créditos rurales de todo tipo, incluidos los de la reforma agraria, así como numerosos programas complementarios (Propera, PRONERA, etc.). En las condiciones de crisis económica, los gastos sociales son sistemáticamente cortados, y lo que queda es usado como elemento de chantaje sobre el movimiento agrario. La consigna del MST es "ocupar, resistir, producir". A medida que se llegaba a la última fase ("producir"), el crédito pasaba a ser esencial.

Stédile afirmaba que "el pequeño productor no puede competir con las grandes propiedades exportadoras, pero no es incompatible con ellas". El MST propuso entonces que la pequeña propiedad fuese estimulada a producir alimentos, e integrada a pequeñas y medias agroindustrias. Pero la Coordinación Nacional del MST denunció lo que cabía esperar de la política oficial del gobierno FHC. El gobierno había gastado apenas 28% del presupuesto aprobado para la reforma agraria. Comprometido en garantizar los elevados beneficios de los bancos, el gobierno retiró R\$ 181 millones de la reforma, 14% de todo su presupuesto.

En cuanto al Pronera, el presupuesto garantizaba proyectos de educación de jóvenes y adultos en 1.538 asentamientos, con 100 mil alumnos, en colaboración con 39 universidades. Los cortes del gobierno FHC retiraron 90% de los recursos. Sólo 3 millones de reales fueron ejecutados, lo que alcanzaba apenas para alfabetizar 7 mil trabajadores, en vez de 100 mil. Pero FHC autorizó la renegociación de la deuda de los grandes productores, con alargamiento de los débitos en 20 años y rebaja de las tasas de interés, así como que 100% de los recursos tomados por los bancos para la agricultura sean usados para comprar títulos públicos con corrección cambial.

²⁸ DAVID, B.A. Atlas dos beneficiários da Reforma Agrária. In: STÉDILE, João P. (org.). *Op. Cit.*, p. 52.

²⁹ TAVARES, Maria da Conceição. A questão agrária. *Folha de S. Paulo*, 27 de abril de 1997.

Bajo el gobierno “socialdemócrata” del PSDB, se promovió una verdadera anti-reforma agraria, acelerada por la propia crisis económica. En 1985, había (según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE) 23,4 millones de personas ocupadas en el campo, número que cayó a 16,6 millones en 1996. En el mismo período, el número de establecimientos agrícolas cayó de 5,8 millones a 4,98 millones: casi un millón menos, de los que 600 mil fueron suerimidos en el sector mayoritario de la agricultura familiar (explotaciones con con menos de 10 hectáreas). El INCRA, a su vez, registra 300 millones de hectáreas improductivas, pero el ITR de 1997, con previsión de 1,2 millones de reales, recaudó sólo 200 millones (¡menos de una coca-cola por hectárea improductiva!). Entre 1985 y 1995 fueron eliminados 5,24 millones de puestos de trabajo en el campo, y en 1996 (durante solo un año del gobierno FHC) 1,5 millón: bajo el gobierno de FHC también fueron suprimidas 400 mil pequeñas propiedades (para un total de 600 mil suprimidas en toda la década).

En 1997, Brasil pasó a importar U\$S 7,5 mil millones de productos agrícolas (antes producía 90% del trigo que consumía, ahora 66%): cultivaba 7,1 millones de hectáreas menos que en el inicio de la década del ‘90. Bajo FHC, el área plantada cayó de 38,5 a 35,7 millones de hectáreas (-7,2%): entre 1994 y 1997, los precios recibidos por los agricultores aumentaron 37,5%, mientras que los insumos aumentaron 60,1% (la renta agrícola cayó 59%). El Pronaf (programa de apoyo a la agricultura familiar) liberó R\$ 2,5 mil millones, para una demanda de 4 mil millones.

La concentración agraria avanzó como nunca, aprovechando la crisis agrícola y la caída del precio de la tierra (-40 a -50% bajo el Plan Real). Ligado a esto estuvo el avance de los grupos paramilitares de los latifundistas, ahora más integrados con la policía: en el primer mandato del gobierno de FHC, fueron asesinados más de 150 trabajadores agrarios, con dos masacres, la de Corumbiara (11 muertos) y la Eldorado dos Carajás (19 muertos). Nadie fue preso, como también sucedió con el asesinato de dos líderes del MST en Pará (abril de 1998), continuación de la masacre de Eldorado, pues encabezaban 550 familias que estaban juntándose a otras 690, sobrevivientes de la masacre que se encontraban en el asentamiento Palmares. Y FHC, con sus supuestos 100 mil asentados, se proclamó el campeón de la reforma agraria. Su política para el campo brasileño fue la de “privatizar la reforma agraria” al Banco de la Tierra: comprar tierra poco productiva a los latifundistas, para dársela al campesinado, desarticular los movimientos de lucha por la tierra, favorecer a las grandes haciendas exportadoras y entregar el control del mercado agrícola a las empresas multinacionales.

No es de extrañar que la lucha agraria haya sido más importante que nunca bajo FHC, ahora ya como movimiento nacional organizado: el MST, originario del Sur, pasó a tener más de 50 mil familias asentadas en el Nordeste. Sus marchas, especialmente la que concluyó con la ocupación de Brasilia el 17 de abril de 1998 (en el primer aniversario de la masacre de Eldorado), con más de 100 mil personas, se transformaron en el canal de protesta de toda la población trabajadora del país.

El Frente Popular organizado alrededor del PT (Partido de los Trabajadores), en el programa de la *União do Povo-Muda Brasil*, de 1989, prometía, en el capítulo titulado "Paz en el Campo", asentar 1 millón de familias e irrigar un millón y medio de hectáreas, en 4 años, previendo un costo de U\$S 12-15 mil por familia asentada (indemnizaciones incluidas) sin contar gastos en salud, educación e infraestructura.

Todo esto estaba por detrás de las necesidades objetivas inmediatas, de la explosividad de la situación agraria y de los propios reclamos del MST: asentamiento de 4 millones de familias, créditos de U\$S 18 mil por familia, pagables en 20 años (y no en 7), desapropiación inmediata de toda tierra improductiva con potencial agrícola, cobro en tierras de todos los grandes deudores de la Sudene (Superintendencia de Desarrollo del Nordeste), frentes de trabajo en el NE para 2 millones de personas, controladas por comunidades y sindicatos, aumentos salariales y canasta familiar para todas las familias. El programa petista no era claro siquiera acerca de los medios necesarios para su reforma: en la práctica, el PT privilegió, durante la campaña electoral, las relaciones con la moderada Contag (ya entonces afiliada a la CUT); su Encuentro Nacional Extraordinario rechazó la moción presentada por la izquierda de legalización de las ocupaciones de tierra ya realizadas.

Neoliberalismo y Cuestión Agraria

La política de la reforma agraria “legal” tuvo una base de cálculo cuestionable: "El Censo Agropecuario de 1985, del IBGE, apuntó la existencia de 24,5 millones de hectáreas productivas no utilizadas, grandeza sustancialmente diferente a la del INCRA".³⁰ El uso del ITR como medio de limitar el latifundio improductivo se fue revelando ridículo: la pequeña y mediana propiedad siempre han pagado más impuesto que la grande; en 1994, menos de 40 millones de reales (US\$ 32 millones, en ese momento) fueron recaudados con ese impuesto.

Los trabajadores rurales formaban casi 40% de la población económicamente activa, en sus diferentes categorías, sobreviviendo 5 millones de establecimientos familiares, productores de la mayor parte de lo que el mercado interno consume. El sector agrícola produjo, bajo FHC, 50 mil millones de dólares anuales (12% del PIB). La caída de 27% de los precios perjudicó a los pequeños agricultores, pues éstos producían para el mercado interno, lo que se agravó con el surgimiento del Mercosur, que eliminó tasas de importación para productos más baratos de los tres socios del Brasil. Hay también 6 millones de asalariados en el campo, temporarios o permanentes, sometidos a migraciones y abandono de sus familias.

Una investigación realizada en la UERJ (Universidad Estadual de Río de Janeiro) en la década de 1980, demostró que más de la mitad de los habitantes rurales vivía por debajo de la línea de pobreza (con menos de un cuarto de salario mínimo, 25 dólares, por cabeza). Eran 3,4 millones de familias de pequeños propietarios, aparceros, medieros, asalariados y trabajadores sin remuneración, 53% de los habitantes del campo: en estados como Ceará, Paraíba y Piauí, sumaban más de 70% de la población rural.

Frente a ello, la estrategia del MST estaba frente a un impasse objetivo, por su dependencia frente al Estado en el crédito rural (y su consecuencia, la ocupación de bancos de crédito agrícola y edificios del INCRA, cuando esos créditos no eran conseguidos o implementados), ínfimo, por otro lado, frente a la miseria rural, del que no parecía poderse salir promoviendo el “cooperativismo socialista” en los asentamientos, definido como "la cooperación que nace con el objetivo del autosostén y para intervenir en el mercado (esfera de la circulación), iniciando su liberación del transportista (camionero) y del intermediario (comerciante)".³¹

Afirmaba el MST que "nuestra gran diferencia es sobre los objetivos económicos, políticos y sociales en las cooperativas, que es cuestión de principios internos" (organización de los cooperativistas en núcleos, distribución democrática de los excedentes): "en términos de organización espacial y geográfica las agrovillas, que permiten la urbanización y facilitan las inversiones sociales en luz eléctrica, agua potable, en escuelas más próximas de los niños".³² Cerca de 900 escuelas primarias, 1.500 profesores, 300 monitores de alfabetización, 35 mil niños y adolescentes, representan la estructura educacional del MST.

En la práctica, en los sectores cooperativos más antiguos, ya se desarrollaban relaciones asalariadas con los campesinos llegados más recientemente. "Nuestro futuro está ligado a la agroindustria", sostuvo José Rainha, símbolo del MST, en relación con la cooperativa más desarrollada, la Cocamp (del Pontal de Paranapanema), que recibiera créditos para instalar una fábrica de frutas elaboradas, otra lechera y otra de procesamiento de granos, y que esperaba plantar 2 millones de pies de café en 1999, transformando al Pontal en la principal región cafetera del estado. En 1996, una encuesta constató que la mayoría de los asentamientos, de un total de 1564, se organizaban en forma de cooperativas de producción, habiéndose constituido hasta ese momento 55, asociadas a la Confederación de las Cooperativas de Reforma Agraria del Brasil (CONCRAB).

Con la reelección de FHC, en 1998, y la crisis económica de 1999, con una repentina y violenta devaluación del real, estas perspectivas comenzaron a hundirse, con lo cual el MST rompió la tregua establecida con el gobierno y recommenzó las invasiones: un ingenio en Pernambuco, tres haciendas en el Noroeste de Paraná y otras tres en el Pontal de Paranapanema. Una investigación demostró que la gran mayoría de los asentamientos, entre 1994 y 1997, fue consecuencia de

³⁰ GRAZIANO, Francisco. *Qual Reforma Agrária?* San Pablo, Geração Editorial, 1996, p. 77.

³¹ MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). *Uma Concepção de Desenvolvimento Rural*. s.d.p., p. 28.

³² STÉDILE, João Pedro. Entrevista. *Universidade e Sociedade* n° 13, San Pablo, s.d.p., p. 57.

invasiones campesinas: de 352 asentamientos en San Pablo, Pernambuco, Goiás, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina y Mato Grosso do Sul, 304 fueron producto de invasiones de campesinos sin tierra, y sólo 48 de iniciativa del gobierno federal.³³

En los 8 años del gobierno FHC, poco avanzó la reforma agraria. Brasil continuó teniendo el latifundio más grande del planeta, perteneciente a la constructora Almeida, de Curitiba, con 4,5 millones de hectáreas, casi la mitad del estado de Sergipe. Eran 27.556 los terratenientes que poseían propiedades mayores de 2 mil hectáreas cada uno, siendo propietarios de 178.172.765 hectáreas, o de 43 % de todas las tierras de Brasil. También había 4,6 millones de familias agrarias sin tierras. En Brasil, debido a la concentración de la propiedad de la tierra, 40 millones de hectáreas son cultivadas, en otras palabras, solamente 10 % del potencial existente: la mayoría de esas explotaciones está en las propiedades con menos de 500 hectáreas.

El gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC) había establecido como una de sus prioridades llevar a cabo la reforma agraria, estableciendo como meta de su mandato (1995/98), el asentamiento de 280.000 nuevas familias de trabajadores rurales sin tierra. Para alcanzar ese objetivo el gobierno estableció un número creciente de beneficiarios anualmente, de tal manera que, según las informaciones del propio gobierno (datos que no coinciden con los del MST), en 1995 se asentaron 40.000 familias; en 1996, 60.000.

Paralelamente, durante los años de 1995/2002 (gobierno de FHC) la concentración de la propiedad de la tierra se incrementó: los terratenientes con más de 2 mil hectáreas incrementaron sus propiedades en 57 millones de hectáreas. Las compañías extranjeras poseen en Brasil más de 30 millones de hectáreas de tierra, con regiones, como el oeste de Bahía, ya comprado por propietarios norteamericanos. En Brasil, los terratenientes apenas pagan impuesto territorial rural (ITR): el valor pago es de aproximadamente R\$ 1 por hectárea / año; el valor total de ITR pago en todo Brasil es más pequeño que el que los habitantes de un barrio del centro urbano de São Paulo pagan, en un año, a la municipalidad, con la contribución urbana (IPTU, impuesto territorial urbano).

El parasitismo del latifundismo puede ser medido a través de algunos datos del censo agrícola de IBGE: las propiedades de menos de 100 hectáreas ocupan 21 % de las zonas rurales, pero son responsables por 38 % de la inversión total, usan 81 % de los obreros ocupados en tareas rurales, y responden por el suministro de 56 % de los alimentos vegetales y el 67 % de las comidas de origen de animal, con 47 % del valor de la producción. Es este sector el que genera alimentos y trabajo.

El proceso de concentración capitalista no alteró la estructura agraria (latifundista) brasileña. De los 851 millones de hectáreas en que se divide el territorio brasileño, en 569 millones (un 70% del área) no hay actividad agropecuaria (áreas de la Amazonia y del Pantanal, reservas forestales e indígenas, ciudades, carreteras, presas y ríos). Se incluyen, sin embargo, en esa área, 106 millones de hectáreas de tierras fértiles, casi todas en el cerrado, aún por ser explotadas. Eso equivale a la suma de los territorios de Francia y de España. Del 30% restante (282 millones de hectáreas), 220 millones son pastizales (para 170 millones de bueyes y vacas) para crianza de animales; 40 millones (un 5% del territorio nacional) producen 120 millones de toneladas de granos y la mayor parte de los productos agrícolas; 20 millones producen caña (incentivados por el biocombustible), naranjas, café y otros cultivos permanentes.

Toda la producción de granos de Estados Unidos, el mayor productor mundial de alimentos, cabe en 140 millones de hectáreas. La diferencia es que los EEUU alimentan 290 millones de bocas, y en Brasil hay 180 millones de habitantes. Hay en Brasil 3.895.968 predios rurales con menos de 200 hectáreas. Los de mediana propiedad (de 200 a menos de 2000 hectáreas) suman 310.158. Los de extensión mayor a 2000 hectáreas, 32.264, ocupan 132 millones de hectáreas.

Brasil posee el mayor rebaño comercial bovino; ocupa el primer lugar en la exportación de carne y en la producción de café y naranjas; el segundo lugar en la producción mundial de soja; y el tercero en la de maíz. A pesar de eso, existe la desnutrición de 53,9 millones de personas. Buena parte de la

³³ *O Estado de S.Paulo*, 12 de octubre de 1998.

producción agropecuaria es exportada, lo que sobra es para el mercado interno: pues sólo 4 empresas brasileñas controlan un 40% de la venta externa de soja, jugo de naranja, pollo y carne.

El capitalista de llamada "revolución en el campo", el héroe del *agrobusiness*, era y es, por lo tanto un espejismo. De las 851 millones hectáreas existentes en Brasil, solamente 42 millones corresponden al agronegocio, con 70 millones consagrados al ganado (pecuaria), 120 millones son (o serían) propiedad de los pueblos autóctonos, y 110 millones, tierras de protección del medio ambiente. El resto, casi 500 millones de hectáreas, se dividen entre latifundios improductivos y áreas *devolutas* (fiscales, pertenecientes al Estado). Y Brasil no es, justamente, el paraíso de la "preservación ambiental". Transformado en uno de los principales productores mundiales de soja, la cultura de esa oleaginosa invadió el norte del país, la frontera agrícola principal de la así llamada "más grande reserva ecológica de la humanidad", y ya empieza a avanzar en la selva amazónica, amenazando la biodiversidad de la región.

Más de 4 millones de familias fueron expulsadas de la tierra en los años de FHC, debido a la expansión del latifundio, a las altas tasas de intereses de los bancos y la construcción de diques. Entre 1985 y 1995 disminuyó en un millón la cantidad de establecimientos agropecuarios. Lo mismo sucedió con las parcelas productivas de menos de 10 hectáreas. Estos datos demostraban que cada día surgían más y más familias pobres que se quedaban sin tierras.

Brasil posee 600 millones de hectáreas cultivables, de que 250 millones son áreas devolutas, y 285 millones, latifundios, en su mayor parte improductivos. Casi un cuarto del territorio nacional (200 millones de hectáreas, equivalentes a la superficie de México) no tiene dueños conocidos, ya que no hay registro legal de su propiedad. Además, viven en el campo 1,2 millones de familias de *posseiros*, campesinos que ocupan tradicionalmente un pedazo de tierra y tienen derecho a su propiedad, pero no poseen títulos que les aseguren la ocupación legal de los predios. Nueve millones de trabajadores rurales son, ellos mismos, indocumentados. Brasil mostraba una de las más dispares distribuciones de la tierra en el mundo, con 90% de la tierra en manos de 20% de la población, mientras que el 40% más pobre apenas posee 1% de la tierra.³⁴

Bajo el Gobierno de Lula

Por eso, la reforma agraria era la más esperada de las reformas del gobierno de Lula, quien afirmó que consideraba la reforma agraria como estratégica para superar la crisis social, y prometió realizarla a través de la ampliación de la política de crédito fundiario, de la formación de cooperativas y de la intensificación de la economía de solidaridad. El Programa *Fome Zero*, que se propuso garantizar comidas en cantidad y calidad para aproximadamente 44 millones de personas, tendría éxito solamente si apoyado por la reforma agraria. Era un compromiso de campaña y del gobierno de Lula presidente.

Después de la constitución del gobierno, Lula nombró a Miguel Rossetto, para el ministerio estratégico del Desarrollo Agrario. Inicialmente el Ministro afirmó que el gobierno quería revocar el decreto del gobierno de Fernando Henrique Cardoso que prohibía al Incra (el instituto nacional de la colonización y la reforma agraria) revistar las tierras invadidas por los sin tierra, con vistas a su expropiación, durante dos años. El ministro se declaró admirador de MST.

Bastaron, sin embargo, un par de las quejas de los terratenientes, para que el ministerio del desarrollo agrario negase las noticias de que pensaba revocar el decreto mencionado. Pocos días después, Rossetto garantizó que el gobierno no presentaría propuesta de extinción o alteración del decreto (de n° 2183). En tono rotundo, el ministro repitió esa declaración a un grupo de 50 propietarios, todos miembros de la dirección del consejo de la sociedad rural brasileña, la más tradicional del país. Al día siguiente, la *Pastoral da Terra*, se unió al MST, y denunció que "los agricultores se están armando para impedir la reforma agraria", lo que era confirmado (o mejor, admitido) en una carta enviada al congreso nacional por el movimiento nacional de productores

³⁴ En general, Brasil se encuentra entre las cinco más desiguales distribuciones de renta del planeta: el 10% de los más ricos posee un 46,9% de la renta nacional, mientras 10% de los más pobres sobreviven dividiéndose entre sí un 0,7%. La tajada de los ricos es 67 veces mayor que la de los pobres.

(MNP), dentro de la cual se amenazaba con la creación de milicias: "Sin otra salida, los productores también pueden tomar decisiones al margen de la ley de defender sus propiedades." El MST, por su lado, denunció que la creación del primer comando rural (PCR) demostraba claramente para la opinión pública "quienes son los ladrones". El PCR fuera fundado por terratenientes que copiaban el nombre y la estructura de PCC (primer comando de la capital), la organización principal del crimen y del tráfico de drogas en el país.

El PSDB, partido de FHC, derrotado en las elecciones del 2002, hizo responsable al gobierno por la "tensión" en el campo: Arthur Virgílio, jefe de PSDB en el senado, dijo que el la omisión del gobierno de Lula era responsable por el aumento de la tensión en el campo, acusando al coordinador del MST, João Pedro Stédile, de trabar una guerra contra los agricultores. El senador dijo que el gobierno cometió un al tratar al MST como socio, concediéndole la dirección del INCRA.

El 2 de julio de 2003, el MST envió una carta a Lula, conteniendo una propuesta de reforma agraria, incluyendo el asentamiento de un millón de campesinos sin tierra en el periodo de 2003 a 2006, con un programa de créditos especiales para la reforma agraria, asociar la reforma agraria a un masivo programa de educación en el campo; intensificando la campaña para la erradicación del analfabetismo en las áreas de establecimientos rurales, siendo necesario asignar más recursos financieros al MEC (Ministerio de Educación) para ese propósito; promocionar un programa de entrenamiento profesional que involucrase 20 mil jóvenes y adultos de las áreas de establecimientos y campamentos; combate contra la impunidad de los asesinatos cometidos en el campo (aprobandos el proyecto de enmienda constitucional que transfiriese la competencia de investigar y procesar los crímenes contra los derechos humanos); determinar la investigación contra los agricultores que usan milicias armadas, incitan la violencia y el crimen, y mantienen vinculación con el tráfico de drogas y el contrabando de armas; contrario a la liberación de la plantación y la comercialización de los productos transgénicos; un nuevo modelo agrícola para la generación de trabajo, la producción de alimentos para el mercado interno, la soberanía alimentaria, y la valorización de la vida en el campo.

En septiembre de 2003, sin embargo, se produjo el retiro de gran cantidad de funcionarios del gobierno ligados al MST, incluido el presidente del INCRA. El MST se manifestó contra el cambio de la presidencia del INCRA, declarando "nuestro respeto por el presidente depuesto": "El MST siempre ha mantenido y mantendrá su autonomía en relación con el gobierno; defendimos la necesidad de una reforma agraria como la política de prioridad del gobierno. Las personas eligieron al presidente Lula para hacer los cambios en el modelo agrícola en curso; defendimos una reforma agraria que fuese un instrumento para solucionar los serios problemas de desempleo, del hambre y de la pobreza en el medio rural; para eso necesitábamos una reforma agraria popular, con la democratización del acceso a la tierra, con la expropiación del latifundio improductivo, como determina nuestra Constitución federal. Defendimos la implantación del *agrobusiness* conectado a la reforma agraria, a la democratización de la educación de la educación en el medio rural y a un nuevo modelo tecnológico y de apoyo técnico, apropiado a la agricultura familiar y la cooperativada... Esperamos que el gobierno asuma las medidas necesarias, sea de presupuesto y/o administrativas, para que la reforma agraria sea verdaderamente una prioridad; de nuestra parte, como movimiento social, seguiremos con nuestra tarea principal, es decir, organizar a los trabajadores para seguir luchando por la reforma agraria".

Para la organización de los terratenientes, la UDR (Unión Democrática Ruralista), la destitución de Resende, el ex-presidente del INCRA vinculado al MST, era "un paso importante". En su lugar fue nombrado Rolf Hackbart, que ejercía la función de asesor técnico de los líderes del Gobierno en el Senado y ya fuera presidente del Banco Regional del Desarrollo Económico. Boletines y periódicos informativos expresaron que hubo un retroceso y que el cambio de comando atrasó el proceso de reforma agraria y, principalmente, los proyectos de asentamiento de millares de familias.

El presidente nacional de la UDR, Luiz Antonio Nahban Garcia, declaró que la destitución de Marcelo Resende de la presidencia del INCRA "fue un paso importante para reducir la

radicalización en el campo", porque "todos sabían que Resende era radical y apoyado por el MST". Y, en cuanto a la *Pastoral da Terra* (CPT), organización vinculada a la Iglesia Católica: "Tienen conexiones muy fuertes con el MST y CPT. Para mí, la CPT es una entidad tan delictiva como el MST" (!).

En julio de 2003, la prisión José Rainha, militante símbolo del MST, apareció como un símbolo de la nueva situación política en el campo. El arresto José Rainha fue seguido de la prisión de su esposa, Diolinda de Souza, también activista agraria. La lógica de las prisiones siguió el argumento jurídico usado durante el gobierno precedente, demostrando la persecución política al MST. El juez dijo: "El acusado José Rainha y Diolinda Alves aparecen en los medios de comunicación nacionales no sólo como jefes del movimiento sino también como sus portavoces, en otras palabras, los símbolos rojos". Otros reos fueron condenados con menos fundamentos. La calidad de la persecución política era evidente por el hecho de que la acusación estaba llena de consideraciones del tipo "las acciones promovidas por MST" serían nocivas, y "el gobierno está financiando, aunque parcialmente, la ilícita práctica de MST."

Stédile continuó a considerar el gobierno de Lula como un "gobierno popular", y atacó a "los movimientos que pasaban directamente a la oposición". Aunque en octubre de 2003, el MST dejó claro que "en los primeros diez meses del gobierno de Lula había pocas alteraciones en la política con los asentados". Una nota a la opinión pública del CIMI, Consejos de Misioneros Indigenistas, condenaba el decreto n° 1487, publicado en el Diario Oficial de la Unión el 9 de octubre de 2003, que redujo las tierras del territorio autóctono tradicional de la tribu *kayapó* en 307.000 (trescientos siete mil) hectáreas, favoreciendo mineras rurales y políticos de la zona (el sur del estado de Pará), cediendo a las presiones de las compañías mineras.

Desde el 1° de enero hasta el 30 de noviembre de 2003, la ya mencionada Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) hizo constar 71 homicidios de trabajadores rurales en los conflictos en el campo. El número era 77,5% mayor que el del mismo período del año precedente, y el más alto desde 1991, cuando ocurrieron 54 muertes. Y había un aumento en los intentos de homicidio, eran 76,3% mayores que en 2002, y en el número de familias expulsadas por órdenes judiciales, 87,8% mayor. Pero también el número de las ocupaciones agrarias se incrementó 86,3%, y el de campamentos, 209 %.

En enero de 2003, los movimientos agrarios requerían el establecimiento de 400 mil familias sin tierra del gobierno de Lula en 2003. El gobierno dijo inicialmente tener capacidad para asentar 140 mil familias en su primer año, después bajó la promesa para 60 mil familias. Terminando el año, sin embargo, había poco más de 20 mil familias asentadas. Del presupuesto destinado a la reforma agraria, 65 % fueron cortados por el propio gobierno, como parte de su política de "superavit primario" para garantizar el pago de la enorme deuda pública (principalmente interna). El plan de reforma agraria del gobierno previa el asentamiento de poco más que 350 mil familias en cuatro años. El gobierno no consideró la propuesta lanzada por Plínio de Arruda Sampaio, que previa la posibilidad de asentar un millón de familias durante el mandato de Lula, con un costo de R\$ 18 mil millones, una fracción mínima de lo destinado al pago de los encargos financieros del estado federal.

El plan del gobierno de Lula, presentado por Miguel Rossetto, tenía su eje en el intento de asociar, de manera subordinada, la pequeña producción al *agrobusiness*, con el establecimiento de 335 mil familias durante el conjunto del mandato de cuatro años, un logro dudoso. Rossetto aseguró que cumpliría la promesa del presidente Lula de otorgar predios rurales a 400.000 familias en los cuatro años del gobierno, hasta fines de 2006. En 2003 solo fueron asentadas 37.000, y la meta de 2003 era alcanzar a 115.000 familias, un cuarto de las cuales ya recibieron su tierra.

En abril de 2004 el gobierno anunció la expropiación de miles de hectáreas de tierras para ser entregadas en planes de reforma agraria. 44 mil 300 hectáreas, distribuidas en 11 de los 26 estados del país, fueron consideradas improductivas y por tanto entregadas al INCRA. El lote de hectáreas era el segundo expropiado por el gobierno ese año, después que en febrero se entregara al INCRA otro de 59 mil 800 hectáreas. No se informó, sin embargo, los montos pagados por las

expropiaciones. El anuncio se producía en medio de una nueva ola de invasiones a haciendas y terrenos por parte del MST, que buscaba presionar al gobierno para agilizar la entrega de lotes y financiamiento para el establecimiento de familias. Desde finales de marzo y en abril, más de 15 mil familias ocuparon 53 terrenos en 14 distintos estados brasileños.

A finales de 2005, sin embargo, la “redistribución de tierras” estaba paralizada en Brasil, evaluaron los 45 movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales del Foro Nacional por la Reforma Agraria y la Justicia en el Campo. La acción del gobierno en esa área se redujo a "un mero programa de asentamientos", en cantidad inferior a la prometida, que no cambiaba el cuadro brasileño de concentración de la tierra ni expande la agricultura familiar y campesina. Un estudio de la Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (de la Universidad de San Pablo), divulgado en 2005, comprueba que en Brasil, la agricultura familiar tiene más importancia económica que el agronegocio. Según el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de las 4,9 millones de propiedades rurales existentes en el país, 4,1 millones dependen de la mano de obra familiar, responsable por un 38% de la producción agropecuaria del país. El campo emplea 17,9 millones de personas. Las propiedades de hasta 50 hectáreas absorben un 86% de los trabajadores rurales. De cada 10 trabajadores rurales, 8 están en la producción familiar. La mediana propiedad absorbe un 10,2% y el latifundio, un 2,5%.

De los alimentos que llegan a la mesa de los brasileños, más del 60% provienen de la agricultura familiar. Ella produce casi un 70% de los frijoles, un 84% de la yuca, un 58% de los cerdos, un 54% del ganado lechero, un 49% del maíz, y un 40% de las aves y huevos. En la producción de carne vacuna, la pequeña propiedad rural contribuye con un 62,3%; la mediana, con un 26,4%; la gran propiedad, con un 11,2%. La producción lechera depende de la ganadería familiar en un 71,5%. El latifundio produce sólo un 1,9%. Las medianas responden por un 26,6%. El grueso de la producción agropecuaria del país depende de las pequeñas y medianas propiedades. Sin embargo, el mayor volumen de crédito aún es absorbido por las grandes propiedades. Los productos de exportación están exentos de Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) en la producción, comercialización e importación de insumos agrícolas.

Refiriéndose a 2005, "este fue el mejor año de la reforma agraria en la historia de Brasil", dijo el secretario ejecutivo (viceministro) del Ministerio de Desarrollo Agrario, Guilherme Cassel: “se entregaron tierras a 111.200 familias desde el inicio del año”. Joao Pedro Stédile, del MST, rebatió afirmando que, al contrario, el gobierno estaba usando "los mismos fraudes" de la administración anterior, contando como nuevos asentamientos la simple regularización de familias ya asentadas o la sustitución de las que abandonaron la tierra recibida: la mayoría de las familias quedaron aisladas en la Amazonia, "viviendo en pésimas condiciones", sin posibilidad de producir ni de vender sus cosechas. No se están cumpliendo los principales puntos acordados en mayo entre el gobierno y el MST, como la meta cuantitativa y la prioridad para los grupos familiares que viven acampados.

Según el MST, hay 140.000 familias de campesinos sin tierra viviendo en campamentos precarios, en tiendas de plástico negro, al borde de carreteras o en predios ocupados, a la espera de que el gobierno les asigne una parcela. De acuerdo con el gobierno, cerca de 20.000 familias asentadas este año provienen de los campamentos controlados por los movimientos campesinos.

En los dos primeros años del gobierno de Lula, 2003 y 2004, el Instituto de Colonización y Reforma Agraria anunció haber asentado a 117.555 familias. Aun cumpliendo la cuota de ese año, quedarían más de 160.000 familias para alcanzar la meta en 2006, de lo que no se está ni cerca. Durante los ocho años en que gobernó Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) se asentaron oficialmente 524.000 familias, un dato también cuestionado por el MST. “Este gobierno no logra promover una verdadera reforma agraria porque le da más importancia al agronegocio exportador, y se ha sometido a los grandes terratenientes y adoptado una política económica que favorece al sector financiero, a las empresas transnacionales y a la gran agricultura de monocultivos”, dijo un documento oficial del movimiento campesino.

Agroindustria y Monopolio

En el medio rural brasileño se desarrolla una disputa entre la gran producción agroindustrial, para la cual son prioritarias la exportación y la tecnificación, que provoca desempleo y aumenta las ganancias, y la agricultura familiar y campesina que abastece de alimentos el mercado interno, y emplea a más de 85% de la mano de obra rural. La economía mercantil capitalista tradicional creció en el campo a través de una producción de alcance poco variable de productos, sobretodo de cereales, productos primarios destinado a la venta en un mercado no muy flexible. El crecimiento de la productividad del sector resulta del bajo valor unitario del producto, y de la elasticidad pequeña del consumo de productos primarios en los países desarrollados.

Una superación del impasse vivido por la agricultura tradicional consistía en la expansión del mercado consumidor, a través de la ampliación del consumo. La solución encontrada fue la ampliación del mercado consumidor a través de la aumento de mercancías producidas a partir de una cantidad limitada de materias primas. En otras palabras, con el lanzamiento incesante de nuevos artículos creados por los laboratorios de las industrias del sector. El capital industrial del sector dominó el mercado a través de la creación incesante - imposición - de nuevas necesidades de alimentación, productos alimenticios pré preparados; pré cocinados; diversificados; con gran importancia, a partir de entonces, de la mercadotecnia, creadora de las nuevas necesidades.

Los capitales de la agroindustria condicionaron los procesos: el nuevo dibujo de la acumulación de la industria de alimentos dominó y revolucionó la agricultura - la producción pastoril principalmente, exigiendo el suministro inmediato y elástico de productos de variedad en crecimiento. El proceso de verticalización excluyó a productores pequeños sobre todo en función de su incapacidad de acompañar las nuevas demandas industriales. El nuevo dibujo de acumulación satisfizo los capitales completamente involucrados en el agronegocio. El mercantilizaçã de neo - artículos driven al mercado consolidado garantizó rentabilidad de - excelente temporal. Este último one era proveniente inicialmente de lo exclusivism de la producción y liquidación de artículos con precios seguro para la aprobación y no para la competición.

Consolidado el proceso en los países desarrollados en la década de 1980, el nuevo modelo de la reproducción expandida de capital agroindustrial exigió su internacionalización, en la década de 1990. La internacionalización de los neo - productos exigió la creciente uniformización de los hábitos de alimentación, los gustos, etc. en una globalización del consumo impelida por los medios de formación de la opinión - medios de comunicación, películas - y por las redes mundiales de la distribución de comidas. El corolario, en la economía mundial, fue la liberalización de la producción y del comercio, a través de las negociaciones multilaterales consumadas bajo la hegemonía del gran capital. En los países del capitalismo atrasado, la economía fue desregulada y las fronteras nacionales, se abrieron; el estado se retiró en su papel su de mediador socioeconómico; grandes compañías fueron desnacionalizadas, etc. De este modo, crecieron las mejores condiciones para la construcción de oligopolios inmensos de industrias agroalimentares.

Brasil fue un escenario privilegiado de ese proceso, por el poder de compra de su clase media, por la existencia de cierto desarrollo agroindustrial endógeno, y su puesto estratégico en relación al Mercosul. También en Brasil, la metamorfosis de la industria de alimentación se hizo sentir a través de la adquisición - coalición de compañías nacionales e internacionales activas en el agronegocio: supermercados; beneficiadoras y comercializadores de granos; industria de máquinas y herramientas, etc. La desnacionalización de la producción fue radical. El comercio externo de Rio Grande do Sul (RS), uno de los principales estados agrícolas, en el área del agronegocio, pasó a ser controlado por algunas pocas compañías transnacionales. En RS, de la retracción del área plantada con cereales, en 1985 - 1995, de un millón hectáreas, 80% ocurrió en propiedades de menos de 100.

Las metamorfosis sufridas por el agronegocio brasileño se basan en la penetración inevitable de nuevos sectores productivos por el gran capital, en busca de ganancia en ramas industriales tradicionales, a través del aumento de la composición orgánica del capital. Ese proceso, tecnológicamente positivo porque eleva la productividad del trabajo, es históricamente retrógrado y destructor en la fase actual del desarrollo histórico. Además, con la composición orgánica en

crecimiento del capital invertido en agricultura se hace impracticable la entrada, e inevitable la expulsión, de compañías nacionales y pequeños productores en ese sector productivo.

Se trata de un mercado muy monopolizado, dominado por seis grandes compañías, que tienen el control de 90 % del mercado mundial de semillas: las norteamericanas Monsanto, Dow Chemical, Astra Zeneca, Du Pont, y las europeas Novartis (francesa, coalición de Bayer y Ciba Geigy) y Aventis (coalición de Hoechst y Rhône Poulenc). La guerra comercial entre esos monopolios incluye la compra de compañías más pequeñas, configurando un grupo más y más reducido de sociedades anónimas que va consiguiendo un control sin precedentes sobre todos de los aspectos comerciales de las comidas, la agricultura y la salud. Hace 20 años existían miles de compañías de venta de semillas, la mayoría de ellas familiares. Hoy, las diez mayores compañías de semillas controlan la tercera parte del comercio mundial de semillas. Hace 20 años existían 65 compañías de agroquímicos que producían *inputs* agrícolas. Hoy, las 10 compañías principales de agroquímicos controlan más del 90% del mercado mundial, valorado en 30 mil millones de dólares. En 1989, las 10 compañías farmacéuticas más grandes controlaban 29% de las ventas del mundo. Hoy, las 10 más grandes controlan más del 50%. En la actualidad, las diez compañías más grandes del mercado veterinario controlan 61 % de ese mercado, valorizado en en 16 mil millones dólares.

Los "gigantes genéticos verdaderos", en el campo de la biotecnología agrícola, son esencialmente siete, y todos figuran entre los fabricantes principales de pesticidas: Syngenta, Astra Zeneca, Novartis, Aventis, Monsanto, Dupont, y Dow Chemical. Esas compañías tienen 74 % de todas las patentes en ese sector. El área mundial de cultivos transgénicos se multiplicó 25 veces en cinco años, de 1,7 millón hectáreas en 1996, para aproximadamente 44,4 millones de hectáreas en 2000. Afirman que esos cultivos fueron difundidos más rápido que cualquier otra tecnología agrícola en la historia. Eso demuestra, dicen, que los agricultores aprecian esta tecnología realmente. Sin embargo, los transgénicos no son un fenómeno mundial. En 2000, solamente tres países, los Estados Unidos, Argentina y Canadá, eran responsables por 98 % del área plantada con transgénicos. Y las tres cuartas partes de todos los transgénicos agrícolas habían sido modificadas con solamente una característica: la tolerancia para herbicidas.

Además, el mercado de semillas transgénicas es dominado por solamente una sociedad anónima. En 2000, las semillas modificadas genéticamente por Monsanto fueron sembradas en 38 millones de hectáreas en el mundo entero. Es decir, 86 % del área total dedicada a los cultivos comerciales transgénicos. La uniformidad, la agricultura industrial y la concentración corporativa es la características que describe a los cultivos transgénicos, no la diversidad, no la seguridad nutritiva, no los "mercados competitivos".

Los cultivos modificados genéticamente son una herramienta de la agricultura industrial, no de la agricultura sustentable. Los beneficiarios de esos productos son las compañías multinacionales, no el público. Son productos dibujados para retirar la producción de alimentos de las manos de las comunidades local, y crear la dependencia de los agronegocios de las sociedades anónimas transnacionales. La alarma sonó con la tendencia a eliminar el derecho de los agricultores de ahorrar sus propias semillas, guardarlas para la próxima cosecha, producir y mejorar sus propias semillas. Éste es un derecho ancestral que es reconocido por la de FAO de las Naciones Unidas como un derechos de los agricultores. Más que 400 millones de personas del mundo entero, pobres básicamente rurales, dependen del almacenamiento de sus propias semillas. Las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria. Quien controla las semillas controla la preparación de comidas. Con la ingeniería genética, las semillas fueron convertidas en un "agente de sistema", que los gigantes genéticos usan para desarrollar nuevas tecnologías genéticas.

El agronegocio se transformó en la *vedette* del gobierno de Lula, al batir todos los records históricos de exportaciones. En 2003, el agronegocio vendió US\$ 30,7 mil millones al exterior y garantizó el superavit de la balanza comercial. El total superaba en US\$ 5,8 mil millones (o 23,3%) las ventas US\$ 24,839 mil millones en 2002. Con eso, la participación de las exportaciones del agronegocio en el total de las exportaciones brasileñas se incrementó de 41,1% a 41,9% en 2003. Las importaciones aumentaron 6,6%, llegando a US\$ 4,791 mil millones. La balanza comercial del

agronegocio también batió records, con un superavit de US\$ 25,848 mil millones, 27% encima del saldo favorable de US\$ 20,347 mil millones, registrado en 2002. El resultado puso al agronegocio como responsable por la totalidad del superavit global de US\$ 24,824 mil millones (los otros sectores económicos presentaron un déficit de mil millones de dólares en el mismo período).

El sector del agronegocio es responsable por 33 % del producto bruto interno (PIB) del país, estimado en R\$ 1,937 billón (poco menos de un billón de dólares) en 2005, y por 37% de los empleos brasileños. Otra información, de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), apunta el modelo de la expansión del agronegocio como la causa principal de los 28 homicidios de agricultores, de enero a agosto de 2005.

Agrobusiness, Exportaciones y Deudas

El desempeño de las exportaciones en 2003, era atribuible al crecimiento de los precios internacionales de los productos primarios y a la entrada en nuevos mercados. El liderazgo en las exportaciones correspondió al complejo de la soja, que aumentó 35,2 %, de US\$ 6,008 mil millones hasta US\$ 8,125 mil millones. Además del aumento del volumen exportado en razón de la cosecha record de 52 millones de toneladas. También aumentaron las ventas de carne, compuestas de ventas de bovino y de carne de pollo. Las exportaciones del café aumentaron 7 %. En trigo, el Brasil empezó a exportar, 50 mil toneladas en 2003 (antes, no exportaba nada). Las ventas de 3,5 millones de toneladas de maíz añadieron US\$ 375 millones, resultado 40% superior al de 2002. Las exportaciones de papel y celulosa aumentaron 38 %, de US\$ 2 mil millones para US\$ 2,8 mil millones.

Las ventas externas se diversificaron en 2003, con un aumento expresivo de la participación de nuevos mercados, como Asia, Medio Oriente y Europa Oriental. En todos los bloques económicos principales hubo crecimiento de las exportaciones brasileñas: Mercosul, 40 %; Nafta, 17 %; UE (Unión Europea), 22,4 %; Europa Oriental, 26,8 %; Asia, 33,3 %; Medio Oriente, 34,3 %; y África, 9,7 %. Los países de la UE continuaron en el liderazgo, absorbiendo 36,4 % de el total exportado por el agronegocio brasileño. Asia incrementó su tajada de 16,7 % para 18,1 %, alcanzando al Nafta, quien presentó una reducción de 19 % para 18,1 % en su participación en 2003.

En el Brasil del “campo moderno”, de ese modo, está avanzada la transformación de la agricultura en una empresa rentable regulada por la ganancia y la producción para el mercado mundial. “Agronegocio” es sinónimo de “producción para el mundo”, para el mercado mundial. El campo exportó productos forestales (papel, celulosa, madera), carnes (bovino, suína y de aves); soja, cereales, trigo y aceite; café; azúcar y alcohol; jugos de frutas; algodón y verduras; tejidos de fibras; maíz; cuero, cáscaras, zapatos; tabaco; harinas; pescado, cacao.

La ironía fue que, en 2003, Brasil tuvo que importar arroz, algodón y maíz, además, evidentemente, de trigo. El “Brasil moderno” del “agronegocio que exporta”, tiene que importar arroz, frijoles, maíz, trigo y leche (las comidas básicas de los trabajadores brasileños) y otros productos y materias primas industriales, que cuentan con la posibilidad de producción amplia en el propio país.

El país produce y exporta la comida a la que no tiene acceso la mayoría de los trabajadores brasileños. En 2003, entre los 100 productos principales exportados, complejo de soja respondió por el valor más extenso en dólares en el comercio con el exterior, por delante de las exportaciones de aviones, de mineral de hierro, automóviles, computadora portátiles, telefonía celular, aluminio etc. En cuanto a las importaciones, el trigo estaba en el año 2003, en el segundo puesto; la soja importada en el decimonoveno; el arroz en el vigésimo quinto; la leche en polvo después, etc. El agronegocio moderniza al provinciano. Hay importación del trigo, pero ahora también de la leche. Es el perro que corre detrás de su propia cola.

En 1984, el año final del gobierno militar, Brasil exportó 27,005 mil millones de dólares. Ese año, los productos básicos participaron con 32,2% del total de las exportaciones; los semimanufacturados con 10,6%, y los industrializados con 56%. Con la integración mayor del Brasil en el capitalismo internacional, y con el proceso del crecimiento de la deuda externa, fue necesario incrementar las exportaciones para pagar los intereses de la deuda que, en 1964, era de

2,5 mil millones de dólares, y en 1984, de 102 mil millones de dólares. Entre 1981 y 1984 fueron pagados, por el gobierno militar 30,7 mil millones de dólares de intereses de la deuda externa, o sea, poco más de 30 % de su monto total.

En el gobierno de Sarney (1985), primer gobierno civil tras 21 años de dictadura militar, las exportaciones continuaron a crecer, y el país llegó al final de 1989, con un total de US\$ 34,3 mil millones exportados (con 27,8% de productos básicos; 26,9% de semimanufacturados, y 54,2% de productos industrializados. Sin embargo, incluso con la declaración breve de la moratoria de la deuda extranjera, ésta llegó a los 115,5 mil millones de dólares. A pesar de que el gobierno de Sarney pagó US\$ 67,2 mil millones dólares de intereses de la deuda externa, o 58,2% de la cantidad total debida.

Al final del gobierno Collor / Itamar Franco (1994), las exportaciones alcanzaban 43,5 mil millones de dólares (con 25,4% de productos básicos, 15,8% de semimanufacturados, y 57,3 % de productos industrializados). Pero la deuda externa también llegó en ese año a 148,2 mil millones de dólares, con un pago de los intereses en el período del gobierno de Collor / Itamar del gobierno de 80,2 mil millones dólares, en otras palabras, más de 54 % del total de la deuda.

Bajo el gobierno de FHC el paisaje no fue diferente. El crecimiento de la deuda y de los pagos de intereses continuó ocurriendo, con la ampliación de las exportaciones. Éstas llegaron a un total de US\$ 60,3 mil millones en 2002 (con 28,1% de productos básicos, 14,9% de semimanufacturados y 54,7 % de de productos industrializados). La deuda externa, sin embargo, en 1998, llegó a 241,6 mil millones de dólares en medio de la crisis de la devaluación. La deuda externa brasileña registrada al final de 1999 era igual a 42 % de la riqueza que Brasil produce durante un año, o a aproximadamente cinco años de exportaciones. La deuda pública brasileña total, la llamada deuda mobiliaria federal, que era de R\$ 62 mil millones cuando FHC asumió el gobierno (1995), aumentó hasta R\$ 432 mil millones en 2000, teniendo una conexión íntima con el crecimiento de la deuda externa.

Durante los ocho años del gobierno de FHC, se pagó en concepto de intereses de la deuda externa la suma de 102,4 mil millones dólares, o sea, 45% del total de la deuda. De Sarney al gobierno de FHC, Brasil pagó, en concepto de intereses, un total de 250 mil millones de dólares de la deuda externa. Si a esa cantidad se añaden las amortizaciones de la deuda principal, de 1985 hasta 2002 (385,7 mil millones de dólares) se llega a un total de 635,7 mil millones dólares pagados: en 18 años, de 1985 a 2002, el Brasil pagó varias veces el total del monto de la deuda.

Es en esa lógica que entran las exportaciones brasileñas y su espectacular crecimiento. Analizando la balanza comercial entre 1985 y 2002, las exportaciones generaron un superávit comercial de 143,4 mil millones de dólares. Pero entre 1995 y 2000, hubo un déficit de 24,3 mil millones dólares, debido a la valorización del real. El balance general en el período fue de 119,2 mil millones de dólares de superavit comercial. El balance “espectacular” del agronegocio y de las exportaciones brasileñas no llegó, por lo tanto, en el período, a la mitad de la cantidad pagada en concepto de intereses de la deuda externa: cuanto mayor la cantidad exportada, más la deuda creció, en beneficio del capital financiero internacional, y de los capitalistas nacionales e internacionales que incrementaron sus ganancias con el crecimiento de las exportaciones.

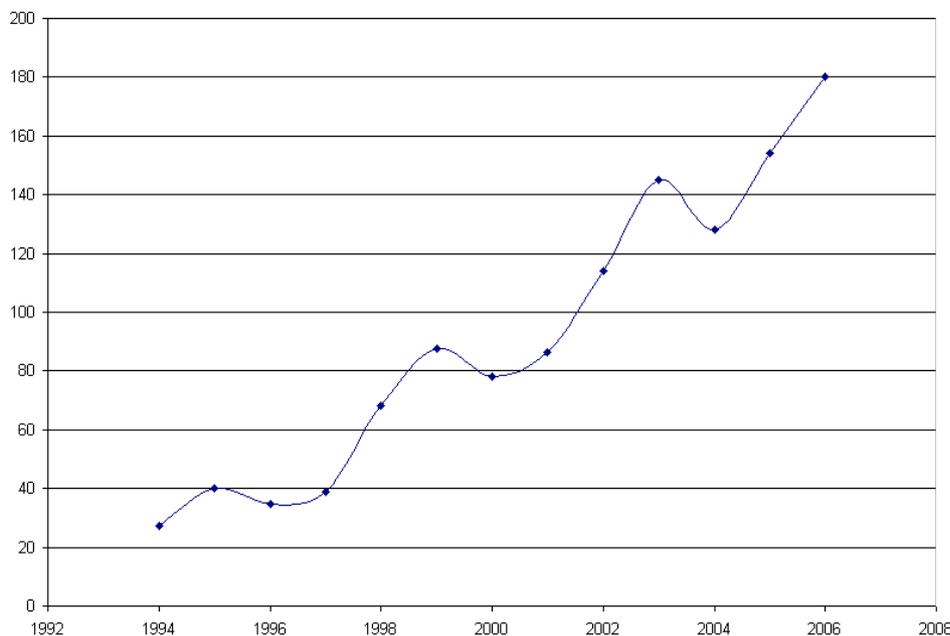
Durante el gobierno de Lula, a partir de 2003, la tendencia se mantuvo e incrementó. Como resultado general de la política económica, los costos del sector público con el pago de los intereses llegaron en los primeros ocho meses de 2003 a R\$ 102,42 mil millones, o 10,2 % del PIB. El gobierno federal, los estatales y municipales, la Previsión Social, el Banco Central, y las empresas estatales, gastaron con los intereses 68,75% más que en el mismo período de 2002 (R\$ 60,69 mil millones, o 7,17 % del PIB), o más de 60 veces que los R\$ 1,7 mil millones usados en el programa *Fome Zero*, principal bandera social del gobierno. El crecimiento de los costos con los intereses de la deuda fue provocado, básicamente, por la política de intereses altos asumida por el Banco Central: las tasas pagadas por el gobierno para que los inversionistas aceptasen sus títulos llegaron a alcanzar un techo de 26,5% (reales) al año.

En 2003, se registraron 73,0 mil millones de dólares en concepto de exportaciones. Las importaciones alcanzaban 48,2 mil millones de dólares, lo que configuraba un superavit comercial de 24,8 mil millones de dólares. Las exportaciones fueron incrementadas en 21,1% en relación a 2002, con un aumento total de 12,7 mil millones de dólares. De las exportaciones totales, los productos básicos eran responsables por 33,2%, los semimanufacturados, 15,6%, y los productos industriales, 54,3%. Los automotores (vehículos de carga, automóviles, repuestos de automóvil, neumáticos y motores para vehículos) fueron la sección que generó los saldos de exportación más grandes, con ventas totales de 10,6 mil millones de dólares, correspondientes a 14,6% del total de las exportaciones.

Los compromisos con la deuda externa e interna no solo continuaron, sino que también crecieron. Lula recibió el país con una deuda externa de 227,68 mil millones de dólares, de la que se amortizaron en 2003 un total de 34,31 mil millones de dólares, además del pago de 13 mil millones de dólares de intereses. La deuda externa llegó a 219,9 mil millones dólares al final del ejercicio. La deuda pública total federal, que incluye la deuda externa, pasó sin embargo de R\$ 826,9 mil millones en diciembre de 2002, para R\$ 929,3 mil millones (o US\$ 400 mil millones, aproximadamente) al final de 2003, con un crecimiento de 12 %.

O sea, fue pagado un monto correspondiente a 28% de la deuda, y aún así, en enero de 2004, la deuda era 12% más grande que al principio del gobierno Lula. Los pagos en concepto de intereses crecieron también, llegando a R\$ 145,2 mil millones en 2003, una cifra superior al 60% del presupuesto federal. En 2006, la deuda pública total federal superó la barrera simbólica de R\$ un billón (situándose próxima de US\$ 500 mil millones).

Un gráfico relativo a la deuda pública federal en los últimos doce años (1994-2006), muestra la trayectoria siguiente, expresada en miles de millones de reales:



En sus primeros dos años, el gobierno de Lula (con su ministro de Economía, Palocci) pagaron R\$ 300 mil millones a los acreedores, sin reducir la deuda, que era de R\$ 900 mil millones en diciembre de 2003 (mientras aplicaron menos de mil millones para la reforma agraria, o cinco mil millones para las universidades públicas). El gobierno de Lula reforzó su alianza con los especuladores financieros nacionales e internacionales. El Banco Itaú, principal institución financiera nacional, anunció el beneficio semestral más grande de la historia financiera del país, en 2005: casi R\$ 2,5 mil millones; la semana siguiente, el banco Bradesco anunció un beneficio superior, R\$ 2,6 mil millones. Veamos ahora las grandes empresas industriales. Para el mismo semestre, las ganancias de Vale do Río Doce (CVRD), se elevaron a R\$ 5,1 mil millones. La

Petrobrás, "compañía estatal", en realidad controlada por la bolsa (principalmente por los fondos de pensión norteamericanos) registró un lucro de R\$ 9,9 mil millones. La "renuncia fiscal" del estado federal, en beneficio de los empresarios, se incrementó 12% en 2005, llegando al registro histórico de R\$ 27 mil millones.

Agronegocio, Transgénicos y Comercio Exterior

Cabe esclarecer también cual es el sector que tiene la participación más expresiva en la producción agrícola del país. Ciertos especialistas (con apoyo de los grandes medios de comunicación) consiguen afirmar que no tiene sentido, dentro de la lógica económica, distribuir tierra, o sea, una política de la reforma agraria, porque el capitalismo en el campo ya habría logrado todos los progresos técnicos necesarios: una política de la reforma agraria podría desestabilizar al sector "competitivo" del campo, para dejarlo vulnerable. La "modernización conservadora" habría transformado a los grandes propietarios de tierra, que ahora producirían de manera moderna y eficiente, lo que habría puesto a los latifundios en el sector de las propiedades productivas: con ese mito se pretende continuar garantizando que 132 millones de hectáreas sigan en manos de poco más de 32 mil terratenientes.

Los datos de IBGE respecto al censo agrícola de 1995/6, demuestran que las unidades pequeñas son las que producen la gran mayoría de los productos del campo. Del total del personal empleado en los establecimientos (17,9 millones de trabajadores) las unidades pequeñas usaron 87,3%, las medias 10,2 %, y las grandes solamente 2,5 %. El latifundio esconde la tierra improductiva. En realidad, el papel de la gran propiedad en el país, fue siempre el de servir de reserva patrimonial.³⁵

Por otro lado, el agronegocio tiene un límite muy preciso, la política agrícola proteccionista practicada por los EEUU y la UE. Si bien los Estados Unidos afirman estar dispuestos a eliminar barreras tarifarias, lo cierto es que la Ley de Inversión y Seguridad Agrícola del 2002, sometida por el Presidente Bush, y aprobada por el Congreso de los EEUU, contiene un gasto de 20 billones de dólares anuales en subsidios para la agricultura norteamericana, e introduce elementos tales como el enlace entre subsidios y producción agrícola, lo cual promueve un incremento en la oferta del producto agrícola y lo prepara a inundar los mercados internacionales. De igual manera, coloca el peso del apoyo a la agricultura en los contribuyentes y no en el mercado: los exportadores del llamado *agrobusiness*, tales como Cargill y Archer Daniels, tienen acceso a dichos productos a un precio muy por debajo de los costos de producción. En otras palabras, no solamente se benefician los agricultores norteamericanos, sino también los intermediarios que venden en las áreas periféricas.

Al ser confrontado Robert Zoellick, principal representante comercial norteamericano, con las contradicciones de la política republicana en relación al sector agrícola, éste se limitó a responder que "los Estados Unidos están comprometidos a eliminar subsidios y a cortar tarifas siempre y cuando otros hicieran lo mismo y dejando claro que no se eliminarían los beneficios de la Ley Agrícola".

Con el acuerdo Brasil – EEUU para la implantación, en los períodos previstos, del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) se abrieron las puertas para un plan de la colonización económica (y política) de América Latina por los Estados Unidos. Contrariamente a las apariencias, América Latina tiene una importancia estratégica para los EEUU. Entre 1990 y 1997, América Latina era el mercado más dinámico para los Estados Unidos, al recibir 20 % de las exportaciones estadounidenses, mientras que Japón y Asia oriental recibían 25 % conjuntamente. Esto permitió, a los EEUU, absorber una parte importante de su déficit comercial con Japón y Europa.

En América Latina, por otro lado, se encuentran 40 % de todos los animales y especies vegetales existentes en el planeta, en otras palabras, casi la mitad de la biodiversidad mundial. Eso es un elemento fundamental cuando se desarrolla una competencia despiadada para descifrar el código genético de las especies, con vistas a las aplicaciones comerciales de la genética. Los grandes

³⁵ OLIVEIRA, Arioaldo Umbelino. *Os Mitos sobre o Agronegócio no Brasil*. Documento presentado en el XII Encuentro Nacional do MST, São Miguel do Iguçu, de 19 a 24 de enero de 2004.

laboratorios de los Estados Unidos y de Europa están patentando los códigos genéticos, y por eso los Estados Unidos ponen tanto énfasis en la defensa de la "propiedad intelectual." Los laboratorios descifran los códigos genéticos, después los patentan, introducen los transgénicos masivamente, por ejemplo, en la agricultura, y pronto cobran de los agricultores y de los países periféricos por el uso de las patentes así obtenidas. Los Estados Unidos tienen 40 % de los gastos mundiales de investigación, y tienen superavit de varios millones de dólares gracias a ese concepto. La propiedad intelectual es especialmente costosa para los países de bajo y medio ingreso, especialmente en áreas tan sensibles como la salud, cuando se impone la propiedad intelectual sobre las fórmulas de medicinas, por décadas, para males como el HIV, el cáncer, la hepatitis, entre otros; también sobre la alimentación, con las patentes de semillas y agroquímicos (Monsanto posee 91 % de las patentes de las semillas de soja).

No fue simple coincidencia el hecho de que, al mismo tiempo en que Lula dijo "sí" al calendario del ALCA, una reunión ministerial de la OMC en Egipto verificó la crisis del *round* de las negociaciones agrícolas. El llamado "Round de Doha" tiene como eje la apertura del mercado agrícola de los países centrales, a cambio de hacer más profunda la apertura del mercado de servicios de los países periféricos. Su presupuesto era que la apertura del mercado agrícola de Europa para la exportación estadounidense pudiese compensar la entrada de productos agrícolas brasileños en los Estados Unidos. Pero la UE no consigue eliminar sus compromisos de US\$ 50 mil millones de subsidios a sus agricultores: el gobierno francés no estaría dispuesto a enfrentar la movilización de los agricultores de su país.

La intención de la apertura del mercado agrícola está clara en el contrato que preve la normalización de las llamadas normas higiénicas, que se haría de manera de incrementar la exportación de los productores agrícolas brasileños. Las declaraciones en Washington de Lula eran categóricas, cuando afirmaba que el Mercosul y la integración sudamericana podían convertirse en una buena alternativa para las compañías estadounidenses.

De la mano del agronegocio, Brasil entró de lleno en el cultivo de transgénicos. Es un mercado de 21 mil millones dólares a nivel mundial, que puede ser manipulado de acuerdo con la voluntad de sus accionistas mayoritarios, sin la incumbencia de garantizar la alimentación en el mundo entero. Sus industrias principales son Monsanto, Dupont (ambas de origen norteamericano) y, ahora también, la Syngenta, de Suiza.³⁶ Esas compañías implantaron los transgénicos en todo el mundo, a pesar de la falta de aprobación pública. En 1996, el comercio de transgénicos llegó a 280 millones dólares, y en 2004 pasó a 4,7 mil millones dólares, un aumento de 17 veces en nueve años. Brasil ya es el tercer productor del mundo de organismos modificados, sólo perdiendo para los Estados Unidos y Argentina.

Con el crecimiento de la venta de las semillas, también se incrementó el uso de pesticidas. El uso de pesticidas sobre plantaciones transgénicas crece todos los años: desde 1996, el aumento era de 4,1%. En Brasil, la disputa de espacios para cultivo de transgénicos se hizo evidente con la presencia de Syngenta en el estado de Paraná: en marzo de 2006 fue multada por Ibama (instituto brasileño del ambiente y de los recursos naturales renovables) en R\$ 1 millón, por practicar experimentación y plantación de soja y transgénicos de maíz en la zona protegida del Parque Nacional de Iguazu. Se trata de una unidad de protección del medio ambiente.

De acuerdo con la ley de bioseguridad de 2005, la plantación es prohibida "en las áreas de unidades de protección del medio ambiente y las áreas respectivas de la reducción, en las tierras autóctonas, en las áreas de protección de manantiales de agua potencialmente utilizable para el público, y en las áreas declaradas como prioridad para la protección del medio ambiente y de la biodiversidad". Para el MST, "las semillas son históricamente las bases de la supervivencia humana y no pueden ser artículos sometidos al mercado, sino un patrimonio de la humanidad"³⁷.

³⁶ Syngenta es responsable por la más grande contaminación genética ilegal demostrada en el mundo entero. Durante cuatro años, la compañía comercializó el maíz de la variedad Bt10, que tenía su comercialización prohibida, como siendo Bt11, autorizado para la circulación, contaminando el maíz exportado hacia algunos países.

En la "cumbre mundial contra el hambre" realizada en Roma a mediados de 2002, los 4.000 delegados convocados por la FAO (la organización alimentaria mundial, dependiente de la ONU) constataron el incumplimiento de los planes votados en la "cumbre" anterior, en 1996, tendientes a reducir a la mitad el número de personas desnutridas en el 2015. Este objetivo fue pospuesto para 2035. En el mundo hay 850 millones de personas cuya ración alimentaria diaria es inferior a las 2.400 calorías, el mínimo de subsistencia. Aunque algunos países lograron reducir sus índices de desnutrición, la situación de conjunto empeoró drásticamente, en especial en África, donde el número de hambrientos creció en 30 millones en la última década. Cada año mueren 8 millones de personas por desnutrición, la mayoría niños; el 70 por ciento de los hambrientos se concentra en las zonas rurales de los países atrasados. Los "líderes mundiales" no se hicieron ver en la "cumbre" de Roma.

A pesar del impasse, la FAO insistió en la política precedente: el documento aprobado afirmó que la solución al problema del hambre pasa por la liberación del comercio agrícola y de los flujos de capital. Según esa teoría, la "liberalización del comercio" permitiría a los países del Tercer Mundo colocar su producción agrícola en los países centrales; al mismo tiempo, la "liberalización de los flujos de capital" permitiría aumentar las inversiones en el sector agrícola de los países atrasados. Poco antes, la sobreproducción mundial de alimentos derrumbó los precios de los productos agrícolas, empobreciendo a los países productores. La caída del precio del café, del 65% entre 1997 y 2002, por ejemplo, empobreció a 25 millones de familias campesinas. Los subsidios a la agricultura en los Estados Unidos y la Unión Europea profundizan la depresión de los precios. Estados Unidos aprobó subsidios por valor de 190.000 millones de dólares para la primer década del siglo XXI, lo que sería otro golpe demoledor para millones de productores agrícolas en los países periféricos.

La eliminación de los subsidios agrícolas no resolvería el problema. El acceso a los mercados no es libre, sino que se encuentra monopolizado por un pequeño número de empresas que hegemonizan el comercio internacional. El mercado del café, por ejemplo, está en manos de cinco grandes compañías internacionales; el número de las que monopolizan el comercio mundial de granos no es mayor. Los EEUU desarrollaron una importante movilización política para imponer en Roma la liberación del comercio mundial de granos genéticamente modificados, insistentemente reclamada por el gobierno norteamericano, con el respaldo de Gran Bretaña, Canadá, Australia y Argentina.

La resolución aprobada en Roma estableció la "promoción de la utilización de la biotecnología y de las semillas genéticamente modificadas", lo que significó un triunfo para el puñado de grandes laboratorios, como el norteamericano Monsanto o el alemán Bayer, que monopolizan la manipulación genética de alimentos. Como muestra Argentina, la utilización de semillas genéticamente modificadas (más resistentes a las inclemencias climáticas) y de agroquímicos, determina un endeudamiento creciente, que se transforma en quiebra económica cuando se produce la baja de los precios, provocada por la ampliación de una producción que no encuentra mercados; entre 1992 y 1999, años de gran aumento de la utilización de semillas genéticamente modificadas y de agroquímicos en el campo argentino, el número de pequeños y medianos productores rurales cayó de 170.000 a 116.000 en ese país.

Paralelamente a la "cumbre" oficial, un conjunto de ONGs organizó una reunión "alternativa". Sus deliberaciones, como las oficiales, fueron abiertas por el director general de la FAO, el senegalés Jacques Diouf. Las ONGs opusieron a los "planes inoperantes" de la FAO, el concepto de "soberanía alimentaria", que se concentra en "priorizar la producción alimentaria para los mercados locales". Esto podría servir a los granjeros europeos o norteamericanos, pero de ninguna manera a los campesinos y los pueblos de América Latina o de África. ¿Cómo podría la agricultura de subsistencia africana garantizar la alimentación de sus propios pueblos? ¿Con qué recursos podrían desarrollar la producción agrícola los campesinos latinoamericanos?

³⁷ Responsable por 88 % de las semillas transgénicas producidas en el mundo entero, la compañía estadounidense Monsanto declaró un beneficio neto de 833 millones de dólares en los primeros meses del año fiscal de 2006. El resultado era 119,2 % superior al del mismo período del año pasado, con el ascenso de 18,6 % en el volumen de ventas totales.

Perspectivas Inmediatas, Perspectivas Históricas

En la Amazonia, o más precisamente en la región norte de Brasil, fueron asentadas 40% del total de familias, porque allí está la mayor cantidad de tierras públicas. Para obtener tierras en las regiones más desarrolladas del país, como el sur, sería necesario actualizar el índice de productividad que define si una propiedad es improductiva y puede ser expropiada para fines de reforma agraria, de acuerdo a la Constitución. El índice usado data de 1975, cuando se consideraba productiva una hacienda con medio vacuno por hectárea. Ahora, las nuevas tecnologías permiten criar tres o cuatro reses en una hectárea y producir casi el doble de soja u otros granos. Según el gobierno de Lula, los créditos agrarios concedidos pasaron de 2.300 millones de reales (mil millones de dólares) en 2002 a 9.000 millones de reales (3.900 millones de dólares) en 2003.

En abril de 2005, Lula prometió editar un decreto que actualizaría todos los índices de productividad usado por técnicos de INCRA para verificar si una propiedad rural es o no improductiva. Con los nuevos índices, el número de áreas consideradas improductivas crecería, lo que también incrementaría la cantidad de propiedades para el establecimiento de campesinos sin tierras. El balance de la reforma agraria de Lula, sin embargo, es el peor posible, muy por detrás del “neoliberalismo” de FHC: en 2003, sólo fueron asentadas 14 mil familias; en 2004, no llegaron a 50 mil (la propuesta inicial del gobierno, recordémoslo, era de asentar 430 mil familias bajo su mandato). La meta para 2005 era de 115 mil familias: sólo fueron asentadas poco menos de 27 mil. Y 2005 comenzó con el corte de R\$ 2 mil millones del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agrario (de un total de R\$ 3,4 mil millones previstos, o sea, fue cortado más del 50% de los recursos previstos).

2005, también, concluyó con la salida del principal representante del agronegocio en el gobierno de Lula, Roberto Rodrigues, substituido por Guedes Pinto. Con Guedes en el comando, la expectativa era que la agricultura familiar fuese tratada como el sector capitalista, con las mismas prioridades para investigaciones en Embrapa y en las negociaciones del comercio externo. Rodrigues estaba en el gobierno de Lula desde el principio, y había manifestado su insatisfacción con la política económica del gobierno federal por la falta del sostén del gobierno para por lo menos minimizar la crisis que vivía la agricultura, debido a la caída del dólar - que reduce la competitividad de las exportaciones brasileñas - y a la sequía en el sur.

Al mismo tiempo en que rechaza modificar el tipo de cambio, y depreciar el real, el gobierno anunció en 2006 un “paquete de medidas” que podría alcanzar R\$ 75 mil millones en ayuda a los productores rurales. El valor incluye R\$ 50 mil millones en crédito para la nueva cosecha, y R\$ 10 mil millones para la agricultura familiar, además de la renegociación y extensión de las deudas ya contraídas por los agricultores. El “paquete” fue considerado tímido por los ruralistas, que también defendieron la desvalorización de la moneda, la reducción de los intereses bancarios y más renegociación de las deudas agrarias.

Además del abandono de la reforma agraria, 2006 fue testigo del escándalo del ITR (Impuesto Territorial Rural). A lo largo de cuarenta años, algunos gobiernos trataron de activar ese impuesto. El gobierno de FHC probó estacionalizarlo: su ministro Raul Jungmann cambió los criterios del ITR, anunciando que el “nuevo” impuesto rural sería una revolución agraria, usado como instrumento de la corrección de la concentración de la propiedad agraria. Pero no había cualquier mecanismo de castigo a los propietarios que no pagaban, o mintieran en las declaraciones. Como consecuencia de esa política, el gobierno recolectó sólo R\$ 280 millones de ITR durante 2004, lo que es igual a la carga tributaria urbana (IPTU) de sólo un barrio de la ciudad de São Paulo. Por las normas en curso, las propiedades pequeñas están exentas del pago de ITR. Quedan 270 mil propietarios medianos y grandes, que controlan 298 millones de hectáreas, que pagan en concepto de ITR menos de un real (R\$ 1,00) por hectárea, por año, lo que no es, evidentemente, un correctivo de la concentración de la propiedad de la tierra.

¿Qué hizo el gobierno de Lula ante esa situación? Podría seguir la ley: incrementar el ITR por hectárea; incrementarlo progresivamente, año a año; pagar las expropiaciones sólo por el valor declarado por el terrateniente, destinando esos recursos para la reforma agraria, o varias otras

opciones intermediarias. El gobierno de Lula hizo lo que ningún otro gobierno osara: municipalizó la colecta y el destino del ITR. En el último día del año de 2005, para entrar ya en el año fiscal de 2006, el presidente Lula promulgó la nueva ley del ITR, que con eso dejaba de ser un impuesto para la reforma agraria. Ahora pasa a ser un impuesto a ser colectado, supervisado y recaudado por los ayuntamientos municipales, que puede usar el dinero de acuerdo con su propia voluntad. Los terratenientes reaccionaron eufóricos ante la medida, ya pagaban poco y, ahora sería suficiente llegar a un acuerdo con su amigo alcalde para pagar todavía menos.

Hacia el final del 2005, el MST emitió un balance de la reforma agraria bajo el gobierno de Lula:

“Acreditamos que a vitória do governo Lula representava uma alteração na correlação de forças e favoreceria a Reforma Agrária. Foi elaborado o Plano Nacional de Reforma Agrária, que previa o assentamento de 400 mil famílias no período de quatro anos, além de mudanças administrativas no Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), capacitação dos assentados e casamento de Reforma Agrária com agroindústria. Passados dois anos e meio, constatamos que a Reforma Agrária caminha a passos de tartaruga. O governo foi incapaz de implementar seu próprio plano. Faltou coragem para enfrentar os empecilhos da Reforma Agrária, que não anda porque: a) se mantém um estado administrativamente organizado contra os pobres, para atender apenas aos ricos; b) o governo acreditou na falsa idéia que o agronegócio seria a solução para a pobreza no campo. Mas ele beneficia apenas os exportadores e as transnacionais agrícolas; c) o governo não percebeu que a manutenção de uma política econômica neoliberal impede a realização de qualquer programa de Reforma Agrária. A política neoliberal corta recursos orçamentários, concentra renda, prioriza exportações e desemprega. A política que defendemos distribui renda, gera empregos, desenvolve o mercado interno e fixa o homem no meio rural. E a Reforma Agrária é apenas instrumento dessa política.

*“Descontentes, fizemos a Marcha Nacional. Durante 17 dias reunimos 12 mil caminhantes em torno do mesmo objetivo. Conseguimos fazer o governo renovar conosco sete compromissos com o objetivo de acelerar a Reforma Agrária. Pouco aconteceu. O comprometimento de assentar 115 mil famílias este ano resumiu-se, até agora, a aproximadamente 20 mil. Outras 120 mil famílias continuam acampadas, esperando em condições sub humanas. A prometida portaria que altera os índices de produtividade para cálculo das desapropriações não foi publicada até agora. Trata-se de um simples ato administrativo de dois ministros. Estamos cansados de ouvir governantes falar em falta de recursos, enquanto os bancos nadam em bilhões de reais transferidos pelo estado. O governo Lula tem uma dívida imensa com os sem-terra e com a sociedade brasileira no quesito Reforma Agrária!”*³⁸

A mediados de 2006, una fortuna de más de R\$ 75 mil millones de recursos públicos fueron cedidos al agronegocio en una operación del estado federal. *O Estado de S. Paulo* la definió de esta manera: "El gobierno anunció un paquete de R\$ 75,5 mil millones en una nueva generosidad para el sector agrícola, en la expectativa de aplacar la peor crisis ya vivida por el sector".³⁹ Era el tercer "paquete" oficial de la ayuda a los propietarios rurales del agronegócio, en menos de 12 meses. Esos tres paquetes de "generosidad para con los ruralistas" equivalen a aproximadamente US\$ 45 mil millones (al cambio de R\$ 2,25 por dólar): aproximadamente, también, 5 % del producto bruto interno (PIB). Otra comparación, que da una idea más exacta: el gobierno brasileño paga un volumen de de aproximadamente R\$ 160 mil millones anualmente por la deuda pública, o US\$ 71 mil millones, o, todavía, 8,30 % del PIB. Los paquetes de "generosidad para los ruralistas" no están muy detrás de lo que extrae el sector financiero de los cofres públicos. Para cubrir esos hoyos gigantescos provocados por el agronegocio, el gobierno tiene que incrementar la deuda pública, la tasa de interés, los intereses pagados anualmente, valorar el cambio, etc.

El gran equívoco de los agricultores brasileños fue elaborar la teoría de que la agricultura capitalista era capaz de competir en el plano mundial, con la posibilidad de ganar esa competencia. La producción de mundo de soja en el 2004/2005 fue de 213 millones de toneladas. La producción mundial de maíz, es decir el cereal competitivo de la soja, porque está también destinado en su mayor parte hacia la producción de ración, fue de 400 millones de toneladas. En los Estados Unidos, lo que más se produce es maíz, no la soja, que equivale a un quinto de la producción de maíz. Allí, la productividad del maíz está entre 9 y 10 toneladas por hectárea. En Brasil, ella está entre 2 y 3 toneladas por hectárea. En realidad, la agricultura brasileña no tiene reales condiciones de competir en el mercado mundial.

³⁸ Posições políticas do MST nessa conjuntura. MST nº 96, 9 de agosto de 2005.

³⁹ *O Estado de S. Paulo*, 25 de mayo de 2006.

¿En qué situación real se encuentra la *coqueluche* agraria del gobierno brasileño? El corazón de la agricultura-empresa está en crisis. Mato Grosso, el símbolo de la competitividad de las exportaciones brasileñas, debe reducir su producción de granos y algodón en 30 % a 40 % en este año, de acuerdo con los cálculos aproximados de entidades del sector. Ese estado es el más grande productor de soja, algodón y bovino de Brasil, el segundo en arroz, y gran productor también de maíz y sorgo. En la cuna de casi 10 % de la producción de cereales del país, la situación es melancólica. Los distritos municipales en que la prosperidad era ejemplo están con la colecta impositiva cayendo 15%. Ciudades que ya tenían pleno empleo están con 12% de desempleados... Debe haber una reducción de 50% de la área plantada de la zona. El comercio también se ve afectado; en algunos municipios matogrossenses el movimiento cayó 40%.

Con la crisis, un tercio de los cheques están sin fondos. Homero Alves, presidente de la federación de agricultura y ganadería del estado federal de Mato Grosso, dice que "en 2005, fuimos el último estado federal en generación de empleo, dejamos el cielo y fuimos al infierno".⁴⁰ El saqueo de los cofres públicos aumenta la vulnerabilidad de la economía y la pobreza social, y tiene el único objetivo de librar de deudas particulares a los "empresarios modernos", para empezar todo otra vez: más crédito fácil, más deudas, más exportación, más exceso de producción, nueva crisis...⁴¹ El "paquete" agrícola de 2006 fue elaborado cuando se constató que casi 55% de la cosecha de soja de 2006 no conseguía ser comercializada, o sea, cuando se constató una enorme sobreproducción. Para no hundir las finanzas públicas (y su propio gobierno, en vísperas de elecciones generales) el gobierno de Lula determinó que el subsidio a la soja (diferencia entre el precio de mercado y los contratos) sea pagado en 2007... por el próximo gobierno.⁴²

La situación normal del mercado de cereales es la caída relativa de los precios, la agricultura es entonces mantenida con políticas que le garantizan subsidios. Y eso afecta tanto a los pequeños productores como a los grandes; la producción de soja, sobre todo en la área del sur de Brasil, proviene en su mayor parte de las propiedades pequeñas. Las unidades con menos que 200 hectáreas producen aproximadamente de 30 % a 35 % del volumen total de la producción de soja. En Brasil, la liberalización comercial y la política cambiaria promovieron una fuerte transformación de los precios relativos: "La característica radical de esos movimientos de precios, sumada a la reducción del programa de crédito oficial, discrimina fuertemente a los productores de tecnología tradicional y de escasa talla, concediéndoles pocas chances de sobrevivencia".⁴³

Un probable próximo gobierno encabezado por Lula debería hacer frente a los desequilibrios que ha dejado el primer mandato, como una deuda pública que sigue pagando elevados intereses; un fuerte sector ganadero en quiebra, por su alto endeudamiento y un tipo de cambio desfavorable; y, más importante, por la tendencia de la industria a reducir costos con despidos masivos, flexibilización laboral, trabajo en negro y nuevas reformas contra los derechos laborales y previsionales. Las elecciones de 2006, con su inesperada segunda vuelta, han desatado un inicio de crisis política en Brasil y en el plano internacional. Ha quedado en cuestión el Mercosur, en lo que se refiere al interés de la industria paulista de entrar al mercado norteamericano por medio de tratados comerciales. La relación de las masas populares, especialmente campesinas, con el próximo gobierno, cualquiera sea, no serán las de los cuatro años recientes. El coloso obrero y campesino de Brasil hará sentir su peso.

Los campesinos sin tierra acampados ya suman un millón: la cantidad de familias bajo tiendas de lona subió de 60 mil, en 2002, hasta 230 mil, en 2006.⁴⁴ La violencia agraria continua, y de acuerdo

⁴⁰ *O Estado de S. Paulo*, 30 de abril de 2006.

⁴¹ MARTINS, José. O agronegócio assalta os cofres públicos. *Criticas da Economia Política* n° 16 e 17, San Pablo, 1ª e 2ª semanas de junio de 2006.

⁴² D'AMORIM, Sheila. Conta de pacote agrícola fica para 2007. *Folha de S. Paulo*, San Pablo, 13 de mayo de 2006.

⁴³ SILVA DIAS, Guilherme Leite, e AMARAL, Cicely Moitinho. Mudanças estruturais na agricultura brasileira 1980-1998. *Desarrollo Productivo* n° 99, Santiago de Chile, CEPAL-ECLAC, enero de 2001.

⁴⁴ SCOLESE, Eduardo. Sem-terra acampados já somam um milhão sob Lula. *Folha de S. Paulo*, San Pablo, 29 de mayo de 2006.

con la CPT, 93% de los crímenes no son siquiera llevados a juicio. Entre 1985 y 2004 hubo 1.400 asesinatos de campesinos sin tierra.⁴⁵ Hay un promedio de 41 trabajadores agrarios muertos por año. La crisis agraria en Brasil es a la vez económica (sobreproducción y baja productividad en términos mundiales) y social (falta de acceso a la tierra de la enorme masa campesina): como una bomba de tiempo, ella condiciona las perspectivas del próximo gobierno. La explosión de esa bomba pondrá sobre el tapete de la historia todos los problemas irresueltos de la constitución democrática de la nación brasileña, en condiciones históricas y sociales (de clase) inexistentes en el pasado.

BIBLIOGRAFIA

- AKCELRUD, Isaac. *Reforma Agrária. A luta pela terra no Brasil*. San Pablo, Global, 1989.
- BIALOSKORSKI NETO, Sigismundo, e CURY JUNS, Lucio César. *Financial Governance of Brazilian Agrobusiness Systems and Public Policy*. San Pablo, FEA-USP, 1999.
- BUAINAIN, Antonio Marcio. Reflexoes sobre o modelo vigente de reforma agraria. *Cadernos Adenauer* n° 3, Rio de Janeiro, diciembre de 2004.
- BUKHARIN, Nikolai. *L'Économie Mondiale el l'Impérialisme*. Paris, Anthropos, 1973.
- CAMARGO, Aspásia. A questão agrária: crise de poder e reforma de base. In: FAUSTO, Boris (org.). *História Geral da Civilização Brasileira*. Tomo III, vol. 3 (O Brasil Republicano), San Pablo, Difel, 1984.
- CHIAVENATO, Julio José. *Violencia no Campo. O latifúndio e a reforma agraria*. San Pablo, Moderna, 1996.
- COGGIOLA, Osvaldo. *Governo Lula. Dall'illusione alla realtà*. Firenze, Caminito Editrice, 2004.
- CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (CIMI). *Governo Lula reduz terra indígena no Pará*. Brasília, 10 de outubro de 2003.
- CUT (Central Única dos Trabalhadores). *Cartilha de Política Agrícola*. San Pablo, 1989.
- D'AMORIM, Sheila. Conta de pacote agricola fica para 2007. *Folha de S. Paulo*, San Pablo, 13 de mayo de 2006.
- DAVID, B.A. Atlas dos beneficiários da Reforma Agrária. In: STÉDILE, João P. (org.). *A Reforma Agrária e a Luta do MST*. Petrópolis, Vozes, 1997.
- DELGADO, Guilherme C. *Capital Financeiro e Agricultura no Brasil*. San Pablo, Icone, 1985.
- DELGADO, Guilherme C. O desenvolvimento dos assentamentos de reforma agraria. *Correio da Cidadania*, San Pablo, 19 de agosto de 2006.
- DILLON SOARES, Glaucio Ary. *A Questão Agrária na América Latina* Rio de Janeiro, Zahar, 1976.
- FERNANDES, Bernardo M. Formação, especialização e territorialização do MST. In: STÉDILE, João P. (org.). *A Reforma Agrária e a Luta do MST*. Petrópolis, Vozes, 1997.
- GERAQUE, Eduardo. Amazônia: um novo ciclo agrícola. *Gazeta Mercantil*, Caderno Ciência & Saúde, São Paulo, 17 de agosto de 2001.
- GERMANI, Luiz Augusto. A evolução do direito fundiario no Brasil. *Cadernos Adenauer* n° 3, Rio de Janeiro, diciembre de 2004.
- GIANNETTI, Eduardo. *Proálcool, Energia e Transporte*. San Pablo, FIPE, 1981.
- GORENDER, Jacob. *Gênese e Desenvolvimento do Capitalismo no Campo Brasileiro*. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1987.
- GRAZIANO DA SILVA, José. *Para Entender o PNRA*. San Pablo, Brasiliense, 1985.
- GRAZIANO DA SILVA, José. *Questão Agrária*. San Pablo, Brasiliense, 1994.
- GRAZIANO NETO, Francisco. *Qual Reforma Agrária?* San Pablo, Geração Editorial, 1996.
- GRAZIANO NETO, Francisco. *Questão Agrária e Ecologia*. San Pablo, Brasiliense, 1985.

⁴⁵ *Folha de S. Paulo*, 16 de abril de 2006.

GRAZIANO, Xico. Breve historia da reforma agraria: distributivismo e inclusão no campo. *Cadernos Adenauer* n° 3, Rio de Janeiro, diciembre de 2004.

GRAZIANO, Xico. Cidades rurais. *O Estado de S. Paulo*, San Pablo, 4 de julio de 2006.

GRAZIANO, Xico. Rebanho desgarrado. *O Estado de S. Paulo*, San Pablo, 1° de abril de 2006.

HOMEM DE MELO, Fernando. *O Problema Alimentar no Brasil*. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). *Censos Agropecuários*, años 1950, 1960, 1970 y 1975.

JANK, Marcos S., NASSAR, Andre M, e TACHINARDI, Maria Helena. Brasil, potencia agricola mundial. *Cadernos Adenauer* n° 3, Rio de Janeiro, diciembre de 2004.

KAUTSKY, Karl. *A Questão Agrária*. San Pablo, Abril Cultural, 1982.

LENIN, Vladimir I. *O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia*. San Pablo, Nova Cultural, 1988.

MAESTRI, Mário. O agronegócio no Sul do Brasil: “globalização” e desnacionalização. *IV Internacional*, San Pablo, julio de 2002.

MANÇANO FERNANDES, Bernardo. *Genese e Desenvolvimento do MST*. San Pablo, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 1998.

MARTINS, José. O agronegócio assalta os cofres públicos. *Criticas da Economia Política* n° 16 e 17, San Pablo, 1ª e 2ª semanas de junio de 2006.

MEDEIROS, Leonilde Servolo. *Reforma Agraria no Brasil*. San Pablo, Fundação Perseu Abramo, 2003.

Modernização da agricultura prejudica população rural. *Jornal Sem Terra*, San Pablo, marzo de 2006.

MORAIS, Fernando et al. *Transamazônica*. San Pablo, Brasiliense, 1970.

MORAS, Carlos M. Los secretos del Cerrado. *Clarín*, Buenos Aires, 26 de agosto de 2006.

MOREIRA, Ruy. *Formação do Espaço Agrario Brasileiro*. San Pablo, Brasiliense, 1990.

MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). *Uma Concepção de Desenvolvimento Rural*. s.d.p., s.l p.

MST. *O Movimento Campones no Brasil e a Luta pela Reforma Agraria*. San Pablo, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 1999.

MST. *Programa de Reforma Agraria*. San Pablo, Concrab, 1998.

NAVARRO, Zander. Sete teses equivocadas sobre as lutas sociais no campo. In: João P. Stédile (org.). *A Reforma Agrária e a Luta do MST*. Petrópolis, Vozes, 1997.

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino (entrevista). Soberania alimentar requer rompimento com o agronegócio. *Correio da Cidadania*, San Pablo, 27 de mayo de 2006.

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino, e STÉDILE, João Pedro. *A Natureza do Agronegócio no Brasil*. San Pablo, Via Campesina Brasil, 2005.

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. *Agricultura Brasileira*. As transformações recentes. San Pablo, CPM-SEM, 1994.

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. *Os Mitos sobre o Agronegócio no Brasil*. Documento presentado en el XII Encuentro Nacional del MST, São Miguel do Iguazu, de 19 a 24 de enero de 2004.

OLIVETO, Paloma. Etnias ameaçadas. *Correio Braziliense*, Brasilia, 31 de mayo de 2006.

PASSOS GUIMARÃES, Alberto. A estrutura produtiva da agricultura brasileira. *Novos Rumos* n° 6/7, San Pablo, 1988.

PESCHANSKI, Joao Alexandre. Agronegocio, a lógica do terror. *Brasil de Fato*, San Pablo, abril de 2006.

PETRAS, James, e VELTMEYER, Henry. El campesinado y el estado en América Latina. In: www.rebellion.org. Acceso en: 7 de marzo de 2002.

PRADO JUNIOR, Caio. *Evolução Política do Brasil*. San Pablo, Brasiliense, 1974.

Posições políticas do MST nessa conjuntura. *MST* n° 96, 9 de agosto de 2005.

RESENDE, Marcelo, e MENDONÇA, Maria Luisa. *As Políticas do Banco Mundial para a Estrutura Fundiaria Brasileira*. San Pablo, Rede Social, 2005.

RIOETT, Riordan. Brazil's transition to democracy, *Current History* 88 (536), marzo 1989.

SADY, João José. Terror penal: quer-se neutralizar os que lutam pela reforma agrária. *Revista Consultor Jurídico*, San Pablo, 15 de setiembre de 2003.

SCOLESE, Eduardo. Sem-terra acampados ja somam um milhão sob Lula. *Folha de S. Paulo*, San Pablo, 29 de mayo de 2006.

SHANIN, Theodor. *Naturaleza y Lógica de la Economía Campesina*. Barcelona, Anagrama, 1976.

SILVA DIAS, Guilherme Leite, e AMARAL, Cicely Moitinho. Mudanças estruturais na agricultura brasileira 1980-1998. *Desarrollo Productivo* n° 99, Santiago de Chile, CEPAL-ECLAC, enero de 2001.

SILVEIRA, Jose Maria F. J., e BORGES, Izaías de Carvalho. Um panorama da biotecnologia agricola: difusão e impactos sobre o agronegocio. *Cadernos Adenauer* n° 3, Rio de Janeiro, diciembre de 2004.

SINGER, Paul. *Dominação e Desigualdade*. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981.

- SOUZA MARTINS, José de. Los campesinos y la política en Brasil. In: GONZALEZ CASANOVA, Pablo. *Historia Política de los Campesinos Latinoamericanos*. México, Siglo XXI, 1985.
- STÉDILE, João Pedro. O MST e a questão agrária. *Estudos Avançados* 11 (31), San Pablo, IEA-USP, 1997.
- STÉDILE, João Pedro. A luta pela Reforma Agrária. *Revista ADUSP* nº 9, San Pablo, junio 1997.
- STÉDILE, João Pedro. Entrevista. *Universidade e Sociedade* nº 13, San Pablo, s.d.p.
- STÉDILE, João Pedro. O campo exige mudanças: balanço dos tres anos do governo Lula. *Caros Amigos*, San Pablo, enero de 2006.
- SZMERCŚÁNYI, Tamás. O desenvolvimento da produção agropecuária (1930-1970). In: FAUSTO, Boris (org.). *História Geral da Civilização Brasileira*. Tomo III, vol. 4 (O Brasil Republicano), San Pablo, Difel, 1984.
- TAVARES, Maria da Conceição. A questão agrária. *Folha de S. Paulo*, 27 de abril de 1997.
- TOPALOV, Christian. *Estruturas Agrárias Brasileiras*. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1978.
- VEIGA, José Eli. *O que é Reforma Agraria*. San Pablo, Brasiliense, 1983.
- VERGOPOULOS, Kostas. *A Questão Agrária e o Capitalismo*. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977.
- VILAÇA, Marcos Vinícios, e CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, Roberto. *I Signori della Terra*. Roma, 2000.
- ZAFALON, Mauro. Bioenergia anima e muda o agronegócio. *Folha de S. Paulo*, San Pablo, 9 de julio de 2006.